

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

TRIBUNAL ARBITRAL

BIONERGY S.A.S.

Vs.

INVERSIONES JUNAD S.A.S. y OCEAN ENERGY S.A.S.

(Trámite 15788)

Acta No. 29

En la ciudad de Bogotá D.C., el veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020), de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1563 de 2012 se reunió, a través de medios virtuales, el Tribunal Arbitral conformado para dirimir las controversias surgidas entre **BIONERGY S.A.S.**, como Parte Convocante, y las sociedades **INVERSIONES JUNAD S.A.S.** y **OCEAN ENERGY S.A.S.** como Parte Convocada, integrado por el Árbitro Único **JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR**, y la Secretaria **MARÍA ISABEL PAZ NATES**.

Comparecieron igualmente.

En representación de la sociedad **BIONERGY S.A.S.**, la doctora Sonia Elizabeth Rojas Izáquita, en calidad de apoderada judicial, de conformidad con el poder que obra en el expediente.

En representación de la sociedad **JUNAD S.A.S.**, el doctor Henry Alberto Becerra León, en calidad de apoderado judicial, de conformidad con la sustitución del poder que obra en el expediente.

En representación de la sociedad **OCEAN ENERGY S.A.S.**, el doctor Germán A. Garzón Monzón, en calidad de apoderado judicial, de conformidad con el poder que obra en el expediente.

Acto seguido, la Secretaría rindió el siguiente:

INFORME

1. Sobre los términos del proceso

Según quedó precisado en el Laudo arbitral proferido el pasado 1 de julio último, el término de este proceso vence **el 14 de agosto de 2020**.

2. Solicitudes de aclaración y complementación del Laudo Arbitral

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

El 8 de julio de 2020, la apoderada de la sociedad **Bioenergy S.A.S.** remitió por correo electrónico memorial contentivo de solicitudes de aclaración y complementación del Laudo Arbitral proferido por este Tribunal el 1 de julio de 2020.

Ningún otro sujeto procesal elevó solicitud de aclaración, corrección, complementación o adición del Laudo Arbitral.

Hasta aquí el Informe Secretarial.

Con fundamento en el Informe Secretarial que antecede y para resolver, el Tribunal profirió el siguiente

AUTO N° 41

Bogotá D.C., julio 22 de 2020.

Antecedentes

El 8 de julio de 2020, la Apoderada judicial de la Sociedad **BIOENERGY S.A.S.**, ahora en Liquidación, formuló solicitudes de aclaración y complementación del Laudo Arbitral proferido el pasado 1 de julio de 2020.

Para confrontarlas con las exigencias que la ley y la jurisprudencia establecen y proceder, a continuación, a resolverlas, el Tribunal considera necesario transcribir en esta providencia las solicitudes indistintas de aclaración y complementación, con sus respectivas justificaciones, que fueron elevadas en los siguientes términos:

“Tal y como se señalará a lo largo de este escrito, la presente solicitud tiene por objeto que el Tribunal aclare y complemente el laudo en relación con los siguientes puntos:

“a) En relación con la calidad en la cual **OCEAN** actuó respecto del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ETANOL CARBURANTE EN INSTALACIONES DEL CONTRATISTA EN PUERTO DE BUENAVENTURA.

“b) Respecto de los costos en que incurrió **BIOENERGY** para transportar y poder descargar el etanol en el Puerto de Barranquilla.

“c) Respecto del plazo para que **JUNAD** realice el pago de las condenas impuestas.

“d) Respecto de la pretensión de que se condene al pago de intereses de mora.

“e) Respecto de la negativa de condenar en costas a la parte vencida.”

A continuación procedió a presentar la fundamentación de cada uno de los puntos enunciados, así:

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

“a) En relación con la calidad en la cual OCEAN actuó respecto del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ETANOL CARBURANTE EN INSTALACIONES DEL CONTRATISTA EN PUERTO DE BUENAVENTURA.

“El Tribunal negó la pretensión segunda de la demanda principal, en resumen, por cuanto:

*‘(...) lo cierto es que **OCEAN ENERGY S.A.S.** no concurrió a la celebración del ‘CONTRATO PARA EL SERVICIO DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ETANOL CARBURANTE EN INSTALACIONES DEL CONTRATISTA EN PUERTO DE BUENAVENTURA’ o contrato de **SERVICIO DE LOGÍSTICA INTEGRAL** y, por ello, no forma parte de esa relación jurídica contractual y, por lo mismo, no contrajo obligación alguna para con **BIOENERGY S.A.S.***

(...)

*Empero, la oferta inicialmente presentada por **OCEAN ENERGY S.A.S.** el 19 de enero de 2018 en atención a la invitación formulada por **BIOENERGY S.A.S.** no fue aceptada por ésta.*

(...)

***OCEAN ENERGY S.A.S.** tampoco suscribió con **BIOENERGY S.A.S.** la carta de intención que esta Sociedad sí suscribió con **INVERSIONES JUNAD S.A.S.** el 9 de abril de 2018, (...)*

*Empero, no hay mención alguna en el citado Contrato celebrado el 16 de abril de 2018, que **OCEAN ENERGY S.A.S.** fuera cocontratista o que tuviera a su cargo la ejecución del Contrato y por lo tanto el cumplimiento de las obligaciones que **INVERSIONES JUNAD S.A.S.** pactó con **BIOENERGY S.A.S.** Tampoco existe otro sí o documento contractual alguno que así lo señale, suscrito por las Partes.’*

“Conforme a lo anterior, la razón por la cual no se delaró (sic) la prosperidad de la pretensión segunda de la demanda es porque ninguno de los documentos formales [i) oferta aceptada, ii) carta de intención y iii) contrato] que se generaron fueron suscritos por **OCEAN**.

“No obstante ese aspecto meramente formal es cierto y así se señaló en la demanda, y lo aceptaron las convocadas en sus contestaciones, también es cierto que, conforme a lo señalado en el artículo 1618 del Código Civil, se debe estar a la **intención de las partes más que a lo literal de las palabras**, al señalar:

‘ARTICULO 1618. PREVALENCIA DE LA INTENCION. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras’ (Subrayado fuera de texto original)

“Sobre las reglas de interpretación, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Casación del 30 de agosto de 2011, con ponencia de William Namén Vargas¹, señaló:

‘Por lo mismo, la interpretación se predica de los negocios jurídicos existentes, es ulterior a la existencia del acto dispositivo y, en rigor, consiste en establecer y precisar la relevancia normativa de su sentido

¹ “¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: William Namén Vargas. Radicado: 11001-3103-012-1999-01957-01”

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

conformemente a la 'recíproca intención de las partes' (art. 1618 C.C.), de ordinario plasmada en las cláusulas, párrafos, condiciones o estipulaciones, a las cuales, sin embargo, no se reduce ni supedita, por cuanto, aun siendo 'claro' el sentido idiomático, literal o textual de las palabras, en toda divergencia a propósito, impónese reconstruirla, precisarla e indagarla según el marco de circunstancias, materia del negocio jurídico, posición, situación, conocimiento, experiencia, profesión u oficio de los sujetos, entorno cultural, social, económico, político, geográfico y temporal en una perspectiva retrospectiva y prospectiva, esto es, considerando además de la celebración, ejecución y conducta práctica negocial, la fase prodromica, de gestación o formación teniendo en cuenta que '...los actos, tratos o conversaciones preliminares enderezados a preparar la producción de un consentimiento contractual no son intrascendentes; por el contrario, una vez formado el consentimiento son parte integrante de él, y su importancia se traduce en servir de medios auxiliares para interpretar la verdadera intención de las partes, cristalizada en las cláusulas del contrato' (cas. civ. junio 28/1989). (Subrayado fuera de texto original)

“En este proceso quedó plenamente demostrado que **OCEAN** participó activamente, aunque sin éxito, como responsable directo de todas las actividades tendientes a cumplir las obligaciones derivadas del contrato celebrado y que, esa participación, era bajo el entendimiento (sic) de que era parte en el contrato celebrado con **BIOENERGY**.

“Lo mencionado anteriormente, esto es, la participación activa de **OCEAN** fue reconocida por **EL TRIBUNAL EXPRESAMENTE**, entre otras, en el capítulo **B.** del laudo denominado: ‘**EL INICIO DEL ITER CONTRACTUAL: DESDE LAS INVITACIONES DE BIOENERGY S.A.S HASTA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ETANOL CARBURANTE EN INSTALACIONES DEL CONTRATISTA EN PUERTO DE BUENAVENTURA.**’, y también en el capítulo **D.** que hace referencia a ‘**LOS HECHOS QUE OCURREN DESDE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA CONTROVERSIA Y HASTA SU TERMINACIÓN UNILATERAL**’, páginas 148 y siguientes.

“En el expediente obran sin número de pruebas, correos electrónicos, pruebas documentales, pruebas testimoniales que dan cuenta de ello y el Tribunal lo consignó así en relación con los correos electrónicos.

“Y en el laudo se señala, entre otros:

*‘6. Es cierto que **OCEAN ENERGY S.A.S.** concurrió desde el inicio del iter precontractual presentado a **BIOENERGY S.A.S.** una oferta inicial, suministró la información que le fue recabada por ésta, atendió las visitas que **BIOENERGY S.A.S.** hizo a la Planta Pacific Terminal, concurrió a todas las reuniones técnicas celebradas entre el 12 de marzo y el 30 de abril de 2018, antes y después de la celebración del Contrato, cruzó de manera amplia comunicaciones con **BIOENERGY S.A.S.** y obviamente con **INVERSIONES JUNAD S.A.S.**, como arrendatario de la Planta Pacific Terminal celebró (sic) contratos con varias sociedades con miras a su alistamiento y estuvo atento a coadyuvar con **INVERSIONES JUNAD S.A.S.** en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por esta última para con **BIOENERGY S.A.S.** **EN OTROS TÉRMINOS, OCEAN ENERGY S.A.S. FUE SUJETO ACTIVO DURANTE LAS TRATATIVAS INICIALES; ENTRE LA SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE INTENCIÓN Y LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO; Y, OBTIVAMENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MISMO HASTA SU TERMINACIÓN ANTICIPADA.**’ (resaltado fuera del texto).*

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

“Y, en el laudo también se desentrañó el verdadero entendimiento de las partes a este respecto, y así lo señaló al sostener que:

*‘Así, **INVERSIONES JUNAD S.A.S.** y **OCEAN ENERGY S.A.S.**, actuaron de manera conjunta para ofrecer prestar el servicio a que se refirió la oferta, y a las reuniones, en algunas ocasiones asistieron representantes de **INVERSIONES JUNAD S.A.S.** en otras de **OCEAN ENERGY S.A.S.**, indistintamente, **ENTENDIENDO LAS PARTES QUE AMBAS COMPAÑÍAS ESTABAN A CARGO DEL CONTRATO.***

*Todo lo cual fue aceptado durante las actuaciones que precedieron la celebración del respectivo contrato el 16 de abril de 2018, **LO MISMO QUE DURANTE LAS ACTUACIONES POSTERIORES AL MISMO, INCLUYENDO LAS MANIFESTACIONES CONJUNTAS CONTENIDAS EN LA COMUNICACIÓN DEL 27 DE ABRIL DE 2018 DIRIGIDA A BIOENERGY S.A.S., Y EN LAS RESPECTIVAS CONTESTACIONES DE LA DEMANDA ARBITRAL INICIAL Y REFORMADA, TODO LO CUAL FUE CORROBORADO POR LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS PARTES AL RESPONDER A LOS INTERROGATORIOS FORMULADOS ENTRE ELLAS Y LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL TRIBUNAL.***’ (resaltado fuera del texto).

“Pero además de lo anterior, se debe señalar que el Tribunal claramente dejó consignado como **OCEAN** sustenta algunas de sus alegaciones en cláusulas del contrato y en repetidas ocasiones indica que las labores que realizó las hizo para cumplir con las obligaciones del contrato.

“Y el laudo claramente señala:

*‘3. A partir del día siguiente a la celebración del Contrato, en las instalaciones de la Planta Pacific Terminal continuaron reunidos los equipos de **BIOENERGY S.A.S.** y **OCEAN ENERGY S.A.S.**, junto con los contratistas **STARBLAST** y **MONTAJES SIN LÍMITES.***

De tales reuniones dan cuenta las Actas de las reuniones de 17, 18, 19, 21, 22 y 25 de abril que aparecen suscritas por quienes en ellas intervinieron.’

“Y del recuento que ampliamente hizo el Tribunal, y conforme quedó plenamente probado, es claro que las reuniones a las que se refieren esas actas se realizaban con el fin de hacer seguimiento a las labores de alistamiento de la planta con el fin de que se pudiera dar cumplimiento al contrato celebrado.

“En el laudo, el Tribunal hizo referencia a los subcontratistas Starblast y Montajes Sin Límites, y quedó probado que dichos subcontratistas participaron en las obras de alistamiento conforme a los contratos celebrados con **OCEAN**, y éste celebró esos subcontratos precisamente para cumplir las obligaciones con **BIOENERGY**.

“Es así como, por ejemplo, obra el correo electrónico de fecha 19 de abril de 2018 de Starblast para Jaime Robledo –**OCEAN**- Rafael Torres – persona designada para la toma de decisiones en Buenaventura, Francisco Díez –Representante legal de **OCEAN**- y personal de **BIOENERGY**, en el que, claramente se establece que, quien los contactó y que, el servicio prestado de limpieza de los tanques fue por cuenta de **OCEAN**, así:

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

‘Con la empresa Ocean Energy se empezaron las negociaciones y se presentó una cotización al señor Francisco Díez por el hidrolavado de los tanques y la tubería de la planta, no se recibió orden de servicio o contrato, tampoco un anticipo y empezamos de buena fe de parte nuestra (...)’

“Además se debe tener en cuenta que quien pagó por la limpieza realizada por Starblast con el fin de adecuar la Planta para recibir el etanol importado por **BIOENERGY**, fue **OCEAN**, como se desprende del contrato de transacción aportado por la propia sociedad **OCEAN** y que consta dentro de los documentos anexos del dictamen pericial rendido por Díaz Valdiri.

“En el mencionado acuerdo, se define que, el contratante es **OCEAN** y el contratista es Starblast, y a continuación en el literal D) de las consideraciones, establece:

*‘Que tomando en **consideración la necesidad de la contratante** de tener los tanques y tuberías limpias el día 23 de abril de 2018, **el contratante instruyó al contratista** para que enfocara la prestación del servicio de limpieza, principalmente en el tanque 2, sin perjuicio de que se continuara con la limpieza del tanque 3’*
(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

“De lo mencionado es forzoso concluir que **OCEAN** se reconocía igual de obligado que **JUNAD**, con el alistamiento de la planta y las demás obligaciones del contrato.

“Prueba del papel de contratista que **OCEAN** tenía y de su voluntad inequívoca de obligarse en la prestación del servicio de logística integral que requería **BIOENERGNY** para el recibo, almacenamiento y despacho del etanol proveniente del Perú, son las alegaciones que realizó **OCEAN** en su demanda y con los documentos allegados al dictamen, como, por ejemplo, los pagos que realizó a **TUVACOL** y **MONTAJES SIN LÍMITES**.

“Conviene retomar que, en el acta de recibo a satisfacción de los servicios prestados por **MONTAJES SIN LÍMITES**, en los que se incluyen obras de adecuación para el recibo, almacenamiento y el despacho del etanol importado, se menciona:

*‘Se reúnen las partes asistentes con el fin de dar cumplimiento a la entrega por parte de Montajes Sin límites S.A.S (en adelante “MSL”), y recibido por parte de la empresa Contratista **OCEAN ENERGY SAS EL CONTRATO PREFABRICACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍAS, TANQUE Y EQUIPOS EN PLANTA JUNAD BUENAVENTURA** ubicada en la zona industrial de Buenaventura.*

*Estando los representantes de la compañía **OCEAN ENERGY S.A.S.** y de la firma **MSL**, se acuerda mutuamente recibir a satisfacción las obras contratadas por cumplimiento de la totalidad y/o parcialidad del objeto contratado’*

“Tampoco puede dejarse de lado, que hay un sin número de facturas de venta y/o proveedor que dan cuenta que, **OCEAN** obraba en su propio nombre adquiriendo materiales para las adecuaciones que requería la Planta para recibir el etanol importado por **BIOENERGY** y esos documentos fueron aportados por **OCEAN**.

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

“En el expediente también obran un sinnumero (sic) de comprobantes de egreso, aportados por **OCEAN**, en los cuales se señala que esos ‘gastos’ fueron realizados para la ejecución del contrato, al punto que dichos gastos, fueron los que pretendió cobrar **OCEAN** en la demanda de reconvención que presentó dentro del proceso. Si no era parte del contrato de logística, porque solicitó el pago de tales gastos como perjuicios sufridos por el supuesto incumplimiento de **BIOENERGY**?

“Y si lo anterior no fuera suficiente, tal y como se señala en el laudo, dentro del presente proceso se recaudaron varias pruebas testimoniales, y con todas ellas se probó plenamente la participación (sic) de **OCEAN** durante todo el tiempo de ejecución del contrato y, a los testigos que se les indagó al respecto, señalaron que entendían que **OCEAN** era contratista del contrato -valga la redundancia (sic)- celebrado con **BIOENERGY**.

“Adicional, en los alegatos de conclusión presentados por la convocante se hizo referencia a los apartes de los testimonios que dan cuenta de esa situación, por lo que no hay lugar a hacer las transcripciones nuevamente en este escrito, pero sí a señalar que demuestran fehacientemente que el entendimiento de **OCEAN**, era su calidad de contratista de **BIOENERGY**.

“El Tribunal también reconoció (sic) que **OCEAN** tuvo una participación activa en todo lo relacionado con el Loading Master y, para tal efecto, hizo referencia a gran cantidad de correos electrónicos cruzados en relación con este tema, no sólo en los capítulos B. y D. del laudo, sino también al hacer referencia a los incumplimientos del contrato señalados en la página 305 y siguientes, 335 y siguientes del laudo.

“También es cierto que el Tribunal señaló, que **JUNAD** presentó la oferta y celebró el contrato con **BIOENERGY** con el ‘apalancamiento’ (sic) de **OCEAN**, en virtud (sic) del contrato de arrendamiento celebrado, no obstante se debe señalar que **JUNAD** no alegó que **OCEAN** estaba simplemente ‘apalancandolo’ (sic) para la ejecución del contrato, de hecho, al contestar varios hechos de la demanda, señaló que **OCEAN** era la ‘(...) empresa que se encargaría en consecuencia de la ejecución exclusiva del contrato.’. (resaltado fuera del texto). -respuesta al hecho 14 de la demanda-.

“Y, también es cierto que **OCEAN** en ningún momento alegó su calidad de simple ‘apalancador’ de **JUNAD** y tampoco alegó su calidad de simple arrendatario, para señalar que no tenía obligaciones frente a **BIOENERGY** y todo eso tiene una razón clara: entendía que era parte dentro del ‘**CONTRATO PARA EL SERVICIO DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ETANOL CARBURANTE EN INSTALACIONES DEL CONTRATISTA EN PUERTO DE BUENAVENTURA**’.

“Conforme a todo lo señalado y a lo consignado en el laudo al hacer referencia a gran parte de las pruebas allegadas, es claro que las partes entendieron que el contrato estaba a cargo de **OCEAN** y de **JUNAD** y, en atención a ese entendimiento, **OCEAN** participó activamente en la ejecución del contrato. Entonces, a qué título fue esa participación?. Evidentemente a título de contratista conjuntamente con **JUNAD**..

“También se debe anotar que **OCEAN** se acoge (sic) a los términos del contrato celebrado, y prueba de ello no sólo es que se acoge (sic) al pacto arbitral establecido en dicho contrato, sino que en su demanda de reconvención invoca las cláusulas del contrato con **BIOENERGY** como respaldo de sus pretensiones, lo que es reconocido en el laudo en varios apartes.

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

“Tan claro era el entendimiento de **OCEAN** de ser parte del contrato, que en múltiples e-mails, a los que hizo referencia el Tribunal, y obran dentro del expediente, **OCEAN** le solicita a **BIOENERGY** que cumpla el contrato y, en qué calidad lo hace?, pues en su calidad de contratista, de parte del contrato de logística (sic) integral celebrado.

“De los apartes citados, además de otros muchos referidos de manera reiterada por el Tribunal en el laudo, resulta esencial señalar que, el Tribunal declara que, la intención de las partes y en el entendimiento de estas, las dos sociedades -**JUNAD Y OCEAN**- eran quienes iban a ejecutar el contrato, y la existencia de obligaciones contraídas por **OCEAN** en virtud del contrato, empero, posteriormente niega que exista una relación jurídica entre **BIOENERGY** y **OCEAN**, al limitar la participación de esta última al ‘*convenio empresarial*’ suscrito con **INVERSIONES JUNAD**.

“Así las cosas, genera verdadero motivo de duda, el que, dentro de la parte considerativa y del resuelve del laudo arbitral, al referirse a la intención de las partes, se entienda que el querer de ellas era que, las dos sociedades esto es, **JUNAD Y OCEAN**, fueran las obligadas en la prestación del servicio de logística integral y que dicho aspecto fuera claro en las tratativas precontractuales y hasta la terminación del contrato, pero al mismo tiempo niegue la existencia del vínculo entre **BIOENERGY** y **OCEAN**, porque no fue la oferta de ésta la que se aceptó y porque **OCEAN** no suscribió la carta de intención ni el contrato.

“Téngase en cuenta que el contrato de logística objeto de este proceso, no es un contrato solemne que requiere de la formalidad escrita para su existencia (sic), sino que es un contrato consensual, por lo que, el simple hecho de que no se encuentre suscrito por **OCEAN**, no implica que no existiera el contrato frente a ésta, pues su voluntad de adherirse al mismo y de ser parte de éste, se demuestra plenamente con la manera de actuar de **OCEAN**, quien siempre se comportó como parte del contrato, al punto que demandó invocando el contrato celebrado.

“A su turno, no deja de ser confuso el que, teniendo las tratativas luego de la celebración del contrato, una función interpretativa, las conclusiones a las que llegó el Tribunal, en esta fase, no fueran tenidas en cuenta en la evaluación e interpretación del contrato y, contrario a eso, se concluyera que entre **BIOENERGY** y **OCEAN** no existía ningún vínculo legal, y que, producto de esta conclusión, se negara la pretensión segunda de la demanda y se absolviera a **OCEAN** de pagar en favor de **BIOENERGY** junto con **JUNAD**, los perjuicios ocasionados con su incumplimiento.

“SOLICITUD.

“Teniendo en cuenta que en el laudo se declaró probado que:

“(i) las dos sociedades convocadas por **BIOENERGY** actuaron de manera conjunta para ‘*prestar el servicio a que se refiere la oferta presentada y aceptada y el citado CONTRATO PARA EL SERVICIO DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ETANOL CARBURANTE EN INSTALACIONES DEL CONTRATISTA EN PUERTO DE BUENAVENTURA*’,

“(ii) Se declaró la prosperidad de la pretensión tercera de la demanda principal en cuanto que existieron tratativas contractuales entre **OCEAN- JUNAD** y **BIOENERGY**, y que las mismas se deben tener en cuenta para la interpretación del contrato que se celebra.

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

“(iii) el entendimiento de las partes era que ambas compañías, esto es, **OCEAN Y JUNAD**, estaban a cargo del contrato, y

“(iv) que durante las actuaciones posteriores a la celebración del contrato, incluidas las manifestaciones conjuntas contenidas en la comunicación del 27 de abril de 2018 dirigida a **BIOENERGY**, y en las respectivas contestaciones de la demanda arbitral inicial y reformada, todo lo cual fue corroborado por los representantes legales de las partes al responder a los interrogatorios formulados entre ellas y las preguntas formuladas por el tribunal.

“Respetuosamente solicito (sic) al señor Árbitro **ACLARAR** y **COMPLEMENTAR** el laudo, en el sentido de indicar cuál es el fundamento jurídico para que, ateniéndose solamente al texto de la oferta aceptada, la carta de intención suscrita y el contrato firmado con **JUNAD**, no tenga en cuenta las demás pruebas que obran dentro del proceso, especialmente la confesión de **OCEAN** de que sí era parte del contrato de logística, para denegar las pretensiones solicitadas en la demanda de **BIOENERGY** en relación con **OCEAN**.

“Así mismo, respetuosamente solicito **ACLARAR** y **COMPLEMENTAR** el laudo, en el sentido de indicar cuál fue la aplicación dada por el Tribunal a lo previsto en el artículo 1618 del Código Civil, en relación con preferir la intención de las partes a la literalidad del contrato, a la hora de interpretarlo y cuál el fundamento legal para no tener en cuenta la intención de las partes y la manera en que se ejecutó el contrato para denegar la pretensión segunda principal y siguientes principales de la demanda.

“b) Respecto de los costos en que incurrió BIOENERGY para transportar y poder descargar el etanol en el Puerto de Barranquilla.

“Al resolver la pretensión subsidiaria a la quinta principal, el Tribunal, entre otras, señaló:

‘7. Igualmente quedó probado que el Contrato celebrado entre BIOENERGY S.A.S e INVERSIONES JUNAD S.A.S. terminó anticipadamente el 18 de mayo de 2018.

8. Los dos embarques restantes se hicieron en fecha posterior a la terminación del Contrato y las embarcaciones respectivas fueron directamente a Barranquilla, por lo cual, en relación con éstos embarques, BIOENERGY no tuvo que incurrir en gasto alguno por concepto de transporte de etanol del Puerto de Buenaventura al Puerto de Barranquilla, según lo expresado en la pretensión subsidiaria de la quinta principal.’

“Conforme a lo anterior, las razones por las cuales el Tribunal negó el reconocimiento de la suma de US\$125.000, correspondientes a las facturas relacionadas con los dos últimos embarques la suma mencionada fueron:

“a) Porque el contrato celebrado se dio por terminado el 18 de mayo de 2018 y

“b) Porque, dado que los dos embarques fueron directamente a Barranquilla, no se incurrió en ningún gasto de transporte de Buenaventura al Puerto de Barranquilla.

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

“En relación con este punto se debe señalar que le asiste razón al Tribunal respecto de la fecha de terminación del contrato y que los dos embarques fueron al puerto de Barranquilla directamente; no obstante, el Tribunal omitió tener en cuenta (sic) que:

“1) Tal y como lo declaró el Tribunal, el contrato se dio por terminado por los múltiples incumplimientos del contratista -para la parte convocante, de los contratistas-, lo que lo hace responsable de todos los perjuicios causados al contratante.

“2) La razón para que los embarques de etanol fueran descargados en el Puerto de Barranquilla, fue precisamente el incumplimiento del contratista o, lo que es lo mismo, si el contratista hubiera cumplido el contrato no hubiera sido necesario llevar los tres embarques de etanol a Barranquilla y por tanto **BIOENERGY** no hubiera tenido que incurrir en el pago de US\$125.000 por el mayor valor que ocasionó el traslado del etanol hasta el Puerto de Barranquilla.

“Siendo lo anterior, es claro que la causa del sobre costo en el transporte que se generó para llevar el etanol hasta Barranquilla, de los tres embarques, fue el incumplimiento del contratista.

“En relación con la causa del daño, los doctrinantes Sergio Rojas Quiñones y Juan Diego Mojica Restrepo² señalan:

‘En Colombia, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil ha acogido la teoría de la causalidad adecuada como herramienta para señalar cuándo una actuación ha sido la causa de un daño y, a partir de ello, condenar a su autor a reparar el perjuicio irrogado.

(...)

Así, por ejemplo, el profesor Díez-Picazo, al comentar la definición de causa presentada en la Enciclopedia de Denis Diderot y Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert expresa: ‘causa es todo aquello en virtud de cuya eficacia una cosa es; y efecto todo aquello que es en virtud de la eficacia de una causa’ de donde entonces se colige que la consabida causalidad no es más que “el enlace material entre un hecho antecedente y un resultado (daño), conocido en la doctrina como ‘imputabilidad o atribuibilidad objetiva’, ‘imputatio facti o vínculo material’

(...)

De esta forma, se tiene que la causalidad permite al demandante determinar contra quién debe dirigir su pretensión indemnizatoria y cuáles (sic) son los daños que tiene derecho a que le sean reparados por ese agente dañador. Así mismo, la comprobación de la existencia de un nexo causal entre la actuación de un sujeto y un menoscabo injustificado en los derechos de una persona permite al juzgador, a la hora de un juicio de responsabilidad civil, imponer la condena única y exclusivamente al causante del daño y obligarlo a resarcir solamente los perjuicios que ocasionó con su conducta.

Finalmente, desde la perspectiva del acusado de haber irrogado un daño, la causalidad le permite ejercer su defensa para que ante la ausencia de esta fracase la pretensión indemnizatoria dirigida en su contra. De allí se colige también que la causa supone un elemento moralizador: permite hacer patente una exigencia de justicia correctiva en la

² “² Rojas-Quíñones, Sergio & Mojica-Restrepo, Juan Diego, *De la causalidad adecuada a la imputación objetiva en la responsabilidad civil colombiana*, 129 *Vniversitas*, 187-235 (2014). <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.VJ129.caio>”

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

responsabilidad civil, pues impone la obligación de indemnizar solamente a quien ha dado lugar a la interacción injusta, del modo que lo sugieren las concepciones contemporáneas de esta forma de justicia.
(...)'.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia SC7220-2015/2003-00515 de junio 9 de 2015, con ponencia del Dr. Dr. Álvaro Fernando García Restrepo, señaló:

(...)

Sobre la aludida temática, la Corte en Sentencia CSJ SC 9.mar.2001, rad. 5659, sostuvo lo siguiente:

*'(...) Trátase aquí, según puede establecerse, de un proceso de responsabilidad civil contractual, razón por la cual el acogimiento de la acción depende de la demostración, en primer término, de la celebración por las partes del contrato a que se refiere la misma y, en segundo lugar, de los elementos que son propios a aquella, a saber: **el incumplimiento de la convención por la persona a quien se demanda; la producción para el actor de un daño cierto y real; y, finalmente, que entre uno y otro de tales elementos medie un nexo de causalidad, es decir, que el perjuicio cuya reparación se persigue sea consecuencia directa de la conducta anticontractual reprochada al demandado.***

(...)

*Si los contratos legalmente celebrados 'son una ley para los contratantes' (C.C., art. 1602) y, por consiguiente, 'deben ejecutarse de buena fe' y 'obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella' (ib., art. 1603), lógico resulta que su incumplimiento injustificado esté sancionado por la ley misma y que tal comportamiento, por ende, habilite al contratante inocente para solicitar, por una parte, se ordene su cumplimiento forzado o se disponga su resolución y, por otra, **cuando la infracción le ha ocasionado un daño, que se le indemnice, reparación que puede reclamar en forma accesorio a la petición de cumplimiento o resolución o en forma directa, si lo anterior no es posible, (...).***

*Sobre el particular tiene dicho esta Sala de la Corte: 'El contrato legalmente celebrado vincula a las partes y las obliga a ejecutar las prestaciones convenidas, **de modo que si una de ellas incumple las obligaciones que se impuso, faculta a la otra para demandar bien que se le cumpla, que se le resuelva el contrato o el pago de los perjuicios que se le hayan causado por el incumplimiento, pretendiendo estos últimos ya de manera principal** (C.C., arts. 1610 y 1612) o ya de manera accesorio o consecuencial (C.C., arts. 1546 y 1818), los que se encaminan a proporcionar a la parte cumplida una satisfacción pecuniaria de los daños ocasionados' (S. de 14 de marzo de 1996, exp. 4738, G.J. CCXL, p. 407) (se resaltó).' (resaltado fuera del texto).*

“Siendo lo anterior, es claro que el juzgador debe disponer la pretensión indemnizatoria (sic) si dentro del proceso se acredita: (i) el incumplimiento de una obligación establecida en el contrato y (ii) que dicho incumplimiento fue la causa del perjuicio que se alega, el cual, evidente (sic), debe estar probado.

“En el proceso quedó plenamente probado que desde el principio del iter contractual, la intención de **BIOENERGY** era que el producto -etanol- se descargara en el puerto del pacífico y así lo señaló el Tribunal; como también señaló, que en la invitación para que se le ofertara el etanol se especificó que el mismo debía ser entregado en el puerto de Buenaventura y que el etanol llegaría en tres embarques.

“En efecto, el Tribunal indicó:

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

*‘4. El mismo lunes 19 de febrero de 2018, **BIOENERGY S.A.S.**, formuló invitación abierta para la importación de Etanol, así:*

“De: Convocatorias ‘Enviado el: lunes, 19 de febrero de 2018 06:57 p.m. Asunto: Importación de Etanol

“IMPORTACIÓN DE ETANOL

*“1. Objeto: Bionergy está interesada en recibir propuestas para importar 16 millones de litros de etanol en el período de marzo a mayo de 2018, puesto **CIF** (incluido costo, seguro y flete de la logística marítima o fluvial) **Buenaventura** en el tanque previsto para la entrega del producto. (...)*

*d. Incoterms: **CIF Buenaventura.**’ (resaltado fuera del texto).*

“Y el Tribunal también hizo referencia al contenido de las ofertas presentadas por **OCEAN** y por **JUNAD** -actualización de la oferta-, en las que claramente se señala que:

*‘**OCEAN ENERGY** cuenta con una planta con capacidad de almacenamiento de 100 mil barriles, localizada junto a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura y conectada al muelle petrolero por tubería 12 pulgadas. Estas instalaciones de almacenamiento son únicas en el puerto para el manejo de diesel, gasolina y biocombustibles, debido a las aprobaciones gubernamentales que hemos recibido después de un proceso documental detallado.*

‘OFERTA COMERCIAL

‘Considerando los requerimientos de almacenamiento para Ethanol de 5 millones de litros mensuales para un total de 20 millones de litros, les informamos que contamos con la disponibilidad de manejar un tanque de 33 mil barriles de capacidad bruta con exclusividad para el recibo, almacenamiento y despacho en las facilidades de Pacific Terminal en Buenaventura, planta que actualmente está en calidad de arriendo con exclusividad, conectada al muelle 14 (muelle petrolero) de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, (...)’.

“Y en la oferta presentada por **JUNAD** ésta indicó:

‘Considerando los requerimientos de almacenamiento para Etanol por 4 meses (aproximadamente 5 millones de litros mensuales para un total de 20 millones de litros), les informamos que contamos con la disponibilidad de manejar un tanque de 32.900 barriles de capacidad bruta con exclusividad para el recibo, almacenamiento y despacho en las instalaciones de Pacific Terminal en Buenaventura, planta que actualmente está en calidad de arriendo con exclusividad, conectada al muelle 14 (muelle petrolero) de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, por una tubería de 12 pulgadas y 2 unidades de bombeo conectadas en paralelo para que puedan operar de forma independiente o en conjunto.

“Conforme lo anterior, es claro que las partes sabían, conocieron y se obligaron a que el contrato se ejecutara en la ciudad de Buenaventura, no en otro puerto y, mucho menos en el puerto de Barranquilla y conocieron la cantidad de producto que llegaría y el hecho de que el mismo llegaría en diferentes embarques.

“Y esa voluntad de que el contrato se ejecutara en el puerto de Buenaventura, quedó plasmada en el contrato y así lo reconoció el Tribunal al señalar:

*‘En efecto, el acervo probatorio decretado y practicado en este proceso, incluyendo las documentales y las declaraciones rendidas por los representantes legales de las Partes, da cuenta que luego de las tratativas contractuales entre **BIONERGY S.A.S.**, **OCEAN ENERGY S.A.S.** e **INVERSIONES JUNAD S.A.S.**, (...), el 16*

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

de abril de 2018, celebraron el Contrato para el Servicio de recibo, almacenamiento y despacho de Etanol Carburante en las instalaciones del Contratista en Puerto de Buenaventura.

(...)' (resaltado fuera del texto).

“Y también indicó:

*‘El 16 de abril de 2018 se perfeccionó la compraventa del Etanol Anhidro Carburante Desnaturalizado mediante la celebración del respectivo Contrato de Compraventa No. EtOH- BE01, entre **BIOENERGY S.A.S.** y **MITSUBISHI INTERNATIONAL CORPORATION**, (...).*

*El Contrato de Compraventa fue de Etanol Anhidro Carburante Desnaturalizado conforme a las siguientes Especificaciones: Para 11.1 el Producto debía cumplir con la Resolución 1565 de 2004; para 11.2 y 11.3 el Producto debía cumplir con la Resolución 1565 de 2004 o con la Resolución 0789 de 2016 dependiendo de la fecha de llegada de cada despacho **al muelle 14 del Puerto de Buenaventura**. Todos los despachos debían cumplir con la Resolución 1962 de 2017 bajo la Metodología ISO 14064-1:2006. Volumen: 11.100 Kilo Litros @ 20 Grados Celsius. Tolerancia: +/- 5,0% Elección del Vendedor. **Lugar de Destino: CIF 1sbsp – Muelle 14 Puerto de Buenaventura, Colombia. Tiempo de llegada estimado del Producto al Muelle 14 Puerto de Buenaventura: El plazo de llegada del Producto se estimó, por cada despacho previsto en el Contrato, máximo dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a 11.1, 11.2 y 11.3, en el Muelle 14 del Puerto Buenaventura –Colombia, siendo el trayecto del buque por ruta usual CIF (A3).**’ (resaltado fuera del texto).*

“Quedó probado, y así lo reconoció el Tribunal, que el contrato celebrado con MITSUBISHI se pactó bajo el incoterm CIF (Cost, Insurance and Freight), el que es exclusivo del transporte marítimo y conforme al cual el vendedor es responsable del costo y contratación del transporte marítimo **hasta el puerto de destino especificado por el comprador**. Lo que en nuestro caso implica que el precio pactado con MITSUBISHI cubría el transporte del etanol hasta el puerto de Buenaventura.

“De la circunstancia de que el etanol debía llegar al puerto de Buenaventura (sic), también dio cuenta el Tribunal al hacer referencia a las autorizaciones solicitadas y concedidas por el Ministerio de Minas y Energía y, de hecho, hizo una amplia explicación de las condiciones en que podía ser importado el producto, así como del hecho de que la planta PACIFIC TERMINAL contaba con las autorizaciones necesarias y era un terminal autorizado para el recibo, almacenamiento y despacho del etanol.

“En la página 239 del laudo el Tribunal hizo referencia a la comunicación que **BIOENERGY** radicó ante el Director de la Dian el 30 de abril de 2018, en la que se señala:

‘(...)

Bioenergy, solamente después de haber realizado la nacionalización del etanol el 25 de abril/ 18, recibió información oficial de la sociedad portuaria regional de Buenaventura, hasta el 27 de abril/ 18, informando que el operador portuario no se encontraba habilitado con los permisos respectivos y la terminal tampoco acreditaba la documentación pertinente para garantizar la seguridad de la operación.

‘De otro lado, se identificaron fallas graves en la infraestructura de la terminal contratada, concretamente, en la tubería del muelle a los tanques por omisión de información y vicios ocultos por parte de Inversiones Junad S.A.S. Situación

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

que era imposible conocer por Bioenergy, toda vez que solo hasta el momento de lavado de la misma se evidenció su estado de corrosión, siendo pertinente resaltar que esta terminal es la única habilitada para almacenamiento de etanol carburante en el puerto de Buenaventura. A partir de dicho hallazgo, solo hasta el 28 de abril/18 recibimos información expresa por parte del arrendatario del terminal en relación con el estado de la tubería del muelle a los tanques, el cual indicó que se estaban investigando las alternativas para el manejo del Producto tomando en consideración, el efecto del lodo producido por corrosión en la tubería de acero carbono del muelle y su mezcla con el Producto.'

'Considerando que no fue posible resolver el problema mencionado, se hace necesario buscar un puerto alternativo para el descargue del etanol, (...).

Por lo tanto, Bioenergy exploró la alternativa para el recibo del producto en el puerto de Portmagdalena, terminal Telba, en la ciudad de Barranquilla.

'Considerando que la mercancía se encuentra nacionalizada, para poder llevar a cabo esta operación se requiere realizar el envío de la misma del puerto de Buenaventura, hacia puerto de Barranquilla, a través del canal de Panamá, por lo que se solicita autorización transitoria para la movilización de mercancías nacionalizadas hasta el puerto mencionado.'

“Conforme al texto de la comunicación referida por el Tribunal, es claro que la causa para solicitar la autorización para llevar el etanol al puerto de Barranquilla es el incumplimiento de los contratistas.

“Ahora bien, en el numeral 2° del acápite de Consideraciones realizadas por el Tribunal para el análisis de la Pretensión Subsidiaria de la Quinta Principal de la demanda arbitral y Sexta principal de la demanda arbitral, el Tribunal señaló:

'2. QUEDÓ DEMOSTRADO EN ESTE PROCESO que en el contrato para el suministro de Etanol celebrado entre BIOENERGY S.A.S y MITSUBISHI, se previó que el envío se realizaría en TRES EMBARQUES, CUYO PUERTO DE DESCARGUE SERÍA BUENAVENTURA teniendo en cuenta el contrato celebrado entre BIOENERGY S.A.S e INVERSIONES JUNAD S.A.S.' (resaltado fuera del texto).

“Conforme a lo anterior, es claro que el descargue del etanol debía realizarse en el puerto de Buenaventura y, específicamente en la planta PACIFIC TERMINAL y que se realizaría en tres embarques.

“Y en el numeral 4° de las mencionadas consideraciones el Tribunal indicó que:

'4. Quedó probado que ante el incumplimiento de las obligaciones de INVERSIONES JUNAD S.A.S. fue necesario disponer que el descargue del producto se hiciera en el Puerto de Barranquilla, lo que generó un costo adicional de transporte de este embarque por la suma de SETENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$70.000.00), tal y como consta en las factura correspondiente que obra en el Expediente.

“De lo indicado por el Tribunal en el Laudo, es claro que:

“a) En el contrato con MITSUBISHI, se previó que el envío se realizaría en **TRES EMBARQUES.**

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

“b) Que el **PUERTO DE DESCARGUE SERÍA BUENAVENTURA** y que

“c) FUE POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA PARTE CONVOCADA QUE FUE NECESARIO QUE EL PRODUCTO SE DESCARGARA EN EL PUERTO DE BARRANQUILLA.

“Siendo lo anterior, es claro que el sobre costo en que tuvo que incurrir **BIOENERGY** para llevar el producto al puerto de Barranquilla, tuvo como única causa el incumplimiento de la parte convocada de las obligaciones señaladas en el contrato celebrado. Siendo eso así, conforme a la doctrina y jurisprudencia mencionadas, es claro que dicha parte debe responder por los perjuicios causados y que, en este caso, consisten en el pago del mayor valor que tuvo que pagar **BIOENERGY** para que llevaran el etanol al puerto de Barranquilla para su descargue.

“Así que no pudiéndose descargar el etanol en la Planta ‘*Pacific Terminal*’ y ante la imposibilidad de conseguir un nuevo terminal de almacenamiento en Buenaventura, **BIOENERGY** tuvo que variar el puerto de destino y asumir el mayor valor que implicaba llevar el etanol a Barranquilla, tratándose en consecuencia de un daño cuyo origen es el incumplimiento contractual de las convocadas.

“Por otra parte, en relación con la reparación, el doctrinante Juan Carlos Henao, en su obra ‘*El Daño*’, sostiene:

‘(...) la reparación del daño debe dejar indemne a la persona, esto es, como si el daño no hubiera ocurrido, o al menos, en la situación más próxima a la que existía antes del suceso. Dicho de otra manera, se puede que “Se debe indemnizar el daño, solo el daño y nada más que el daño”, o, en palabras de la Corte Constitucional colombiana, que “el resarcimiento del perjuicio, debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado, mas no puede superar ese límite”. La explicación que se da a esta regla se apoya en un principio general del derecho: si el daño se indemniza por encima del realmente causado, se produce un enriquecimiento sin justa causa a favor de la “víctima”; si el daño se indemniza por debajo del realmente causado, se genera un empobrecimiento sin justa causa para la víctima. Es así el daño la medida del resarcimiento’ (Subrayado fuera de texto original)

“En el numeral 1º de la pretensión subsidiaria a la quinta principal de la demanda presentada por **BIOENERGY**, se solicitó:

*‘1. La suma de **CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TREINTA Y NUEVE CENTADOS DE DÓLAR (US\$407.565,39)** por concepto de los gastos en que tuvo que incurrir **BIOENERGY** por concepto del transporte del etanol del puerto de Buenaventura al puerto de Barranquilla y el demurrage del barco en el puerto de Buenaventura, en su equivalente en moneda legal colombiana teniendo en cuenta la tasa representativa del mercado a la fecha en que se realice el pago’* (Subrayado fuera de texto original)

“De todo lo dicho, se deduce el pago de los US\$125.000, es un daño originado en el incumplimiento contractual que se reclama y que se, declaró probado en el Laudo Arbitral, y por ello, debía ser indemnizado por la parte incumplida.

“Es de anotar que de esta pretensión, el Tribunal excluyó la suma de US\$125.000 correspondientes a los gastos de transporte del etanol del puerto de Buenaventura al puerto de Barranquilla y respecto de dos

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

embarques, lo cual no se acompasa con las declaraciones y reconocimientos realizados en el laudo, pues, se reitera:

“1) El contrato se dio por terminado anticipadamente por los múltiples incumplimientos del contratista - para la parte convocante, de los contratistas- lo que los hace responsable de todos los perjuicios causados al contratate (sic).

“2) La razón para que los embarques de etanol fueran descargados en el Puerto de Barranquilla fue precisamente el incumplimiento del contratista o, lo que es lo mismo, si el contratista hubiera cumplido el contrato no hubiera sido necesario llevar los tres embarques de etanol a Barranquilla y por tanto **BIOENERGY** no hubiera tenido que incurrir en el pago de US\$125.000 por el mayor valor que ocasionó el traslado del etanol hasta el Puerto de Barranquilla.

“Así las cosas, la decisión del Tribunal de negar el reconocimiento solicitado, es confusa y contradictoria con las consideraciones del Laudo, pues no se encuentra conforme con los hechos y reconocimientos que el Tribunal hace en las consideraciones y aún en la parte resolutive (sic) del laudo, tal y como se acaba de hacer referencia.

“Y resulta confusa la afirmación del Tribunal de que, este valor no se reconoce porque ‘con éstos embarques, **BIOENERGY** no tuvo que incurrir en gasto alguno por concepto de transporte de etanol del Puerto de Buenaventura al Puerto de Barranquilla’ si en efecto, el cambio de puerto redundó en un mayor valor que tuvo que ser pagado por **BIOENERGY**, tal como se acreditó con las facturas aportadas al proceso y que no fueron tachadas, por lo que son plena prueba.

“SOLICITUD.

“Teniendo en cuenta que en el laudo expresamente se reconoce que los términos del contrato con MITSUBISHI era CIF Buenaventura, que el despacho se hacía en tres embarques, que el contratista incumplió el contrato y que, en razón de ese incumplimiento (sic) fue necesario llevar el etanol al Puerto de Barranquilla, respetuosamente solicito al Tribunal se sirva **ACLARAR Y COMPLEMENTAR** el laudo en el sentido de señalar cuál fue el fundamento jurídico para no declarar a **JUNAD** responsable de los perjuicios que su incumplimiento le causó a **BIOENERGY**, específicamente en relación con el mayor valor de los gastos en que incurrió para el transporte del etanol al Puerto de Barranquilla, para el segundo y tercer embarque pactados.

“d) Respecto del plazo para que JUNAD realice el pago de las condenas impuestas.

“En las consideraciones del Laudo Arbitral, el Tribunal encontró que la sociedad demandada **INVERSIONES JUNAD S.A.S.** había incumplido ‘El Contrato’ y como consecuencia de ello debía indemnizar a **BIOENERGY S.A.S.** los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual, se refirió a cada uno de los perjuicios que fueron reclamados por mi poderdante.

“Así las cosas, en la parte resolutive del Laudo Arbitral, se dispuso lo siguiente:

‘Sexto: Declarar la prosperidad de la PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA CUARTA PRINCIPAL en cuanto que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a INVERSIONES

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

JUNAD S.A.S. a indemnizar a **BIOENERGY S.A.S.** los perjuicios derivados del incumplimiento del Contrato celebrado, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo.

Séptimo: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo, la prosperidad parcial de la **PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA QUINTA PRINCIPAL** en cuanto que, como consecuencia de las pretensiones anteriores, se condene **INVERSIONES JUNAD S.A.S.** a indemnizar a **BIOENERGY S.A.S.**, las siguientes sumas de dinero:

1. La suma de **DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TREINTA Y NUEVE CENTADOS DE DÓLAR (US\$282.565,39)** por concepto de los gastos en que tuvo que incurrir **BIOENERGY** por concepto del transporte del etanol en volumen de 3.149.970 litros netos (19.815 barriles aproximadamente), del puerto de Buenaventura al puerto de Barranquilla y el demurrage de la Motonave Condor Trader, en el puerto de Buenaventura, en su equivalente en moneda legal colombiana teniendo en cuenta la tasa representativa del mercado cambiario a la fecha en que se realice el pago.

2. La suma de **CINCO MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (USD\$5.889)** por concepto de los costos en que tuvo que pagar **BIOENERGY** por conceptos de los costos de fondeo en el Puerto de Buenaventura, en su equivalente en moneda legal colombiana teniendo en cuenta la tasa representativa del mercado cambiario a la fecha en que se realice el pago.

3. La suma de **NOVESCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (USD\$945)** por concepto del servicio de vigilancia durante el fondeo en el Puerto de Buenaventura, en su equivalente en moneda legal colombiana teniendo en cuenta la tasa representativa del mercado cambiario a la fecha en que se realice el pago.

4. La suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (USD\$357)** por concepto del transporte en lancha hasta el buque, en su equivalente en moneda legal colombiana teniendo en cuenta la tasa representativa del mercado cambiario a la fecha en que se realice el pago.

5. La suma de **CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$138.149.482.00)**, que corresponden al valor anticipado pactado en el contrato más IVA, actualizada conforme al IPC a la fecha en que se realice el pago.’

“De lo expuesto en la parte resolutive del Laudo Arbitral, se tiene que, existe una condena en contra de la sociedad **INVERSIONES JUNAD S.A.S.** y a favor de **BIOENERGY S.A.S.**, no obstante lo cual, el Tribunal Arbitral omitió señalar un plazo dentro del cual la sociedad demandada debe proceder con el pago de las condenas impuestas, a pesar de haber sido expresamente solicitado en las pretensiones de la demanda.

“Al respecto, es importante mencionar que, el laudo arbitral constituye un título ejecutivo que puede ejecutarse mediante un proceso ejecutivo, siempre y cuando contenga una obligación expresa, clara y **EXIGIBLE**.

“Al efecto, en los términos en que se profirió el Laudo Arbitral, se tiene una obligación [entiéndase las condenas impuestas] clara y expresa, mas no exigible, puesto que el Tribunal no estableció el plazo dentro

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

del cual la sociedad **INVERSIONES JUNAD S.A.S.** debía proceder con el pago de las condenas impuestas en su contra.

“Ahora bien, como no se señaló el término dentro del cual la demandada debía proceder con el pago de las condenas impuestas, y sobre todo, no se accedió al reconocimiento de intereses moratorios en contra de **INVERSIONES JUNAD S.A.S.**, se dejó abierta la puerta para que la parte vencida, a su arbitrio y sin que pueda ser exigible por mi mandante, proceda a cancelar el valor de las condenas impuestas, en la fecha en que a bien tenga, sin que, se repite, haya lugar al cobro y reconocimiento de intereses moratorios a favor de mi poderdante.

“En la parte resolutive del Laudo Arbitral se declaró el incumplimiento del Contrato por parte de la sociedad convocada. Como consecuencia en dicho incumplimiento se accedió a las pretensiones de condena a partir de la ejecutoria del laudo arbitral. Sin embargo, no se estableció un plazo para cumplir con el pago de dicha condena ni la obligación de reconocer intereses moratorios sobre la suma debida, a partir del vencimiento del plazo que se otorgue para pagar.

“SOLICITUD.

“Conforme a lo expuesto, y a fin de que el laudo dictado pueda ser exigible y no se pierda la ejecutabilidad del mismo, desnaturalizando su carácter de título ejecutivo, en caso de que el deudor no pague las sumas a que fue condenado, respetuosamente solicito se sirva **ACLARAR Y COMPLEMENTAR** la providencia en el sentido de señalar expresamente el plazo dentro del cual la parte condenada debe efectuar las sumas ordenadas en el laudo.

“d.) Respeto de la pretensión de que se condene al pago de intereses de mora.

“El Tribunal no accedió al reconocimiento de intereses moratorios.

“Nótese que las pretensiones de la demanda arbitral, fueron muy claras en señalar que los intereses moratorios debían de reconocerse y cancelarse, únicamente una vez se venciera el plazo que el Tribunal Arbitral concediera a la demandada, para el pago de las condenas impuestas en dicha sentencia judicial y si no se realizaba tal pago.

“En efecto, en la pretensión sexta de la demanda se solicitó:

‘SEXTA: *Disponer que las anteriores sumas de dinero se deberán pagar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del Laudo, y, en caso de que no se realice el pago en el plazo establecido, deberá pagar intereses de mora sobre los saldos a pagar, liquidados así*

‘a) Respecto de las sumas denominados en dólares de los estados unidos de américa a la tasa máxima para obligaciones en moneda extranjera o a la tasa máxima para los intereses de mora certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia o la entidad que haga sus veces si se ordena su conversión a moneda legal colombiana.

‘b) Respecto de las sumas denominados moneda legal colombiana a la tasa máxima para los intereses de mora certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia o la entidad que haga sus veces.’.

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

“La pretensión anterior se encuentra en un todo conforme a lo establecido en el numeral 1° del artículo 1608 del Código Civil, el cual claramente señala que el deudor está en mora cuando no cumple la obligación dentro del término estipulado; para lo cual, se requiere que se fije un plazo para el pago [tal y como se solicita anteriormente] y, si no paga, entra en mora y como consecuencia debe pagar intereses de este tipo, de acuerdo a la clase de obligación a la que nos estemos refiriendo.

“Téngase en cuenta que la condena a intereses de mora se solicitó sí es que dentro del plazo que el Tribunal conceda para pagar las condenas, el deudor no las paga.

“No obstante lo anterior, dicha solicitud fue denegada por el Tribunal, [en nuestro concepto de manera errada], aduciendo que no había lugar al reconocimiento de intereses, puesto que, 1) las condenas en moneda extranjera, debían ser canceladas en su equivalente en moneda legal colombiana teniendo en cuenta la tasa representativa del mercado cambiario a la fecha en que se realice el pago, y 2) respecto de las condenas en moneda legal colombiana debían ser actualizadas al IPC a la fecha en que se realice el pago.

“Al respecto, se debe precisar que, una cosa es la forma en cómo se deben cancelar las condenas impuestas, esto es, dependiendo si es una condena en moneda extranjera [en su equivalente en moneda legal colombiana a la tasa representativa del mercado en la fecha del pago] o en moneda legal colombiana [actualizada al IPC a la fecha del pago], y otra muy distinta es, la causación y reconocimiento de intereses moratorios sobre el valor de las condenas impuestas, **si éstas no son canceladas dentro de un plazo que deberá fijar el Tribunal Arbitral para proceder con dicho pago.**

“SOLICITUD

“De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito al Tribunal que se sirva **ADICIONAR Y COMPLEMENTAR** su providencia, en el sentido de indicar que las sumas a que fue condenada la parte demandada, deberá ser pagada dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del laudo, advirtiendo que si no se paga, a partir del día siguiente al vencimiento del plazo mencionado se causan intereses moratorios liquidados conforme a lo solicitado respecto de las condenas realizadas.

“e) Respecto de la negativa de condenar en costas a la parte vencida.

“En el literal J) del Laudo Arbitral, después de haber citado el artículo 365 del Código General del Proceso, norma que regula los parámetros a tener en cuenta al momento de liquidar la condena en costas del proceso, se señala lo siguiente:

*‘Para resolver, el Tribunal tiene en cuenta que, conforme quedó establecido en capítulos anteriores de este Laudo, se han acogido buena algunas pretensiones principales y otras pretensiones subsidiarias de **BIONERGY S.A.S.**, y la primera y séptima pretensiones principales de la demanda de reconvención formulada por **OCEAN ENERGY S.A.S.***

En ese punto el Tribunal destaca que las posiciones contrarias de las Partes sobre los asuntos sometidos a su conocimiento y decisión no se basaron en interpretaciones infundadas, caprichosas o temerarias, sino que obedecen al entendimiento que tuvieron sobre la existencia y el alcance las tratativas que precedieron a la celebración del Contrato y de las obligaciones emanadas del mismo, por lo que se requirió la intervención de este Tribunal para dilucidarlo.

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

Por lo expuesto, y con fundamento en lo establecido en el numeral 5 del artículo 365 del C.G.P., el Tribunal, atendidas las results del proceso, así como la conducta procesal de las Partes y de sus apoderados, que estuvo exenta de mala fe y temeridad, no impondrá condena en costas.

“Y en la parte resolutive del Laudo, al definirse lo pertinente respecto de la condena en costas, el Tribunal decidió lo siguiente:

‘Octavo: Negar las pretensiones segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima principales de la demanda arbitral, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo.

“Nótese que el Tribunal Arbitral no accedió a condenar a **INVERSIONES JUNAD S.A.S.** al pago de costas y agencias en derecho a favor de mi poderdante, aduciendo que, su posición jurídica dentro del proceso, es decir la defensa, no fue infundada o caprichosa y que su actuación dentro del proceso estuvo exenta de mala fe o temeridad.

“No obstante lo anterior, la normatividad que regula la condena en costas y agencias en derecho, esto es, el artículo 365 del Código General del Proceso de manera alguna hacen referencia a ningún factor **subjetivo** que deba tenerse en cuenta para la fijación de la condena en costas [entiéndase gastos y agencias en derecho]. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-157/03 cuyo Magistrado Ponente fue el Dr. Mauricio González Cuervo, sostuvo lo siguiente:

‘5.1.8. LA CONDENAN EN COSTAS NO RESULTA DE UN OBRAR TEMERARIO O DE MALA FE, O SIQUIERA CULPABLE DE LA PARTE CONDENADA, SINO QUE ES RESULTADO DE SU DERROTA EN EL PROCESO O RECURSO QUE HAYA PROPUESTO, SEGÚN EL ARTÍCULO 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra.’ (Resaltado fuera de texto).

“En este sentido, la conducta de la parte vencida y la fundamentación jurídica que esgrimió en su defensa, no son elementos que deben ser atendidos para la fijación de la condena en costas.

“En aras de discusión, esos elementos subjetivos, como bien lo señala el laudo y lo ha expresado en múltiples ocasiones la Corte Constitucional, sí deben ser analizados para efectos de la imposición de la sanción de que trata el artículo 206 del Código General del Proceso, y por ende, ante la ausencia de mala fe o temeridad de las partes dentro del proceso y en la formulación de sus pretensiones, el Tribunal Arbitral bien puede abstenerse de imponer las sanciones del artículo en comento, más, se reitera, no son materia de análisis ni pueden servir de fundamento para abstenerse de realizar una condena en costas contra la parte vencida ni para eximir la del pago de las mismas.

“Es claro que las normas que la regulan la condena en costas se basan en un factor objetivo, esto es, si una parte resulta vencida, ya sea que prosperen total o parcialmente las pretensiones de la demanda.

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

“En el proceso actual, tenemos que respecto de la sociedad **INVERSIONES JUNAD S.A.S.**, se formularon pretensiones declarativas [primera, segunda subsidiaria, tercera subsidiaria] y pretensiones de condena [cuarta subsidiaria y quinta subsidiaria], siendo que el Tribunal Arbitral accedió a todas éstas.

“En cuanto al valor de las pretensiones de la demanda y el valor que fue reconocido por el Tribunal, tenemos que el valor de las pretensiones ascendía a US\$414.756 y COL\$138.149.482, siendo que en la parte resolutive del Laudo Arbitral, el Tribunal condenó a **INVERSIONES JUNAD S.A.S.** a pagar a favor de **BIOENERGY S.A.S.**, las sumas de US\$289.756 y COL\$138.149.482

“En este sentido, respecto de las pretensiones de condena, se tiene que el Tribunal Arbitral accedió al **69.86%** de las pretensiones de la demanda arbitral reformada en contra de **INVERSIONES JUNAD S.A.S.**, motivo suficiente para que exista una condena en costas [gastos y agencias en derecho] parcial, y si se quiere proporcional, en contra de **INVERSIONES JUNAD S.A.S.** y a favor de mi poderdante.

“En términos numéricos, si se pudiera valorar la defensa de **INVERSIONES JUNAD S.A.S.** dentro del presente proceso, tenemos que si bien se declaró la prosperidad parcial de unas excepciones de mérito formuladas por ésta, lo cierto es que su defensa solamente fue “efectiva” en un 30.14%, toda vez que la sociedad fue condenada a pagar el **69.86%** del valor de las pretensiones de la demanda arbitral que se formuló en su contra.

“Adicionalmente, nótese que dentro del proceso están acreditados todos los gastos en que incurrió mi poderdante, tales como los honorarios y gastos del Tribunal, los cuales fueron fijados en la audiencia de fijación de honorarios y oportunamente cancelados.

“Ahora bien, en relación con las agencias en derecho, si bien los Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura fijan unos límites máximos de condena, lo cierto es que en materia arbitral, es costumbre, que la condena en agencias en derecho [en caso de prosperar la totalidad de las pretensiones de la demanda] se fije en una suma igual a la de los honorarios de un árbitro.

“Al respecto, dentro del Tribunal Arbitral que resolvió las controversias contractuales entre Constructora Ariguaní S.A.S. contra SBS Seguros Colombia S.A., se condenó en costas a la demandada, en los siguientes términos:

‘Considerando que en el presente trámite arbitral prosperan la totalidad de las pretensiones de la demanda principal, que también prospera la pretensión primera principal de la demanda de reconvencción reformada y que la actuación de los apoderados de todas las partes en el proceso se ha ceñido a los principios de transparencia y lealtad procesal, cada quien en defensa de la posición asumida, sin que jurídicamente se les pueda hacer reproche alguno, y el Tribunal recalca la buena fe en el manejo de la problemática planteada, de conformidad con lo previsto en el artículo 365 del Código General del Proceso, al prosperar parcialmente la demanda en reconvencción, es del caso condenar a SBS Seguros Colombia S.A. a asumir el noventa por ciento (90%) de las expensas procesales y agencias en derecho.’³

“Nótese que en el proceso referido, si bien prosperaron unas pretensiones de la demanda de reconvencción, el Tribunal acogió una “operación matemática” mediante la cual, se reconoció el 100% de la condena en costas por la demanda principal y un 10% por la prosperidad parcial de la demanda de reconvencción, con

³ “³ Tribunal Arbitral Constructora Ariguaní S.A.S. contra SBS Seguros Colombia S.A. Laudo Arbitral de fecha 12 de septiembre de 2019. Árbitros: Jorge Santos Ballesteros (Presidente), William Namén Vargas, Alejandro Venegas Franco.”

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

base en el cual, condenó, independiente de la buena fe y el actuar diligente de las partes, a SBS Seguros Colombia S.A., al pago del 90% de las expensas y agencias en derecho.

“En este sentido, toda vez que el Tribunal Arbitral accedió al 69.86% de las pretensiones de condena que fueron solicitadas en la demanda arbitral reformada, y siendo que para la imposición de dicha condena en agencias en derecho, no se tiene en cuenta un factor subjetivo, sino únicamente si prosperaron las pretensiones de la demanda, sería consecuente que, se condenara a **INVERSIONES JUNAD S.A.S.** al pago de costas [gastos y agencias en derecho] equivalente al 69.86% de los valores que se encuentran probados dentro del proceso, según lo expuesto anteriormente.

“SOLICITUD

“De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito al Tribunal que se sirva **ACLARAR Y COMPLEMENTAR** el laudo en el sentido de indicar cuál es el fundamento legal para negar la condena en costas contra la parte condenada, si conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la buena o mala fe no es un factor que pueda ser considerado para fijar o eximir del pago de las costas, y además, por cuanto el numeral 5° del artículo 365 del Código General del Proceso excluye esos factores subjetivos para la imposición de la condena.”

Consideraciones

Revisadas las anteriores solicitudes, procede el Tribunal a estudiarlas, previas las consideraciones acerca del deber de aclarar, complementar o adicionar los Laudos, conforme a las normas procesales contenidas en las Leyes 1563 y 1564 de 2012 y lo que sobre el tema ha señalado la jurisprudencia de nuestras altas Cortes.

1. El contenido de los fallos judiciales y el deber de aclararlos, corregirlos, adicionarlos o complementarlos

En primer lugar, el artículo 280 del Código General del Proceso (C.G.P.) determina que la motivación de la sentencia debe limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. Así mismo, señala que la parte resolutive deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en ese Código.

Así mismo, el artículo 281 del C.G.P. determina que la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la Demanda y en las demás oportunidades que tal Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 1563 de 2012, el Laudo Arbitral puede ser aclarado, corregido y/o complementado de oficio o a solicitud de parte presentada dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del mismo, en los casos y con las condiciones establecidas de manera taxativa en la ley.

En consonancia con lo anterior y en lo que tiene que ver son las solicitudes presentadas, el artículo 285 del C.G.P. determinó, como regla de obligatorio cumplimiento, que *“La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció.”* Con todo, dice esa misma disposición legal, *“podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o que influyan en ella.”*

Así mismo, el artículo 287 del C.G.P. señala que *“cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad”*.

2. El alcance de tales deberes definido por la jurisprudencia

Al declarar la exequibilidad del inciso primero del artículo 309 del C. de P.C., de contenido idéntico al previsto ahora en el artículo 285 del C.G.P., en la Sentencia C-548 del 30 de octubre de 1997, la Corte Constitucional señaló, en lo que aquí nos ocupa, lo siguiente:

“VII. El juez que emitió el fallo puede aclarar los conceptos y frases que ofrezcan motivo de duda siempre que estén consignados en la parte resolutive de la sentencia o que influyan en ella.

“La facultad que se le confiere al juez en la segunda parte de la disposición acusada, para que aclare, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, en auto complementario, los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o que influyan en ella, se ajusta a la Constitución, por cuanto esa permisión permite mantener incólume el contenido del fallo proferido, dotando de certeza la decisión.

“Con dicha permisión se preservan, por una parte, la seguridad jurídica y, por la otra, la eficacia de las decisiones judiciales, pues si la finalidad del proceso es solucionar los conflictos confiriendo a cada uno lo que le corresponde como suyo, los fallos deben ser tan claros que no admitan ninguna duda sobre lo concedido, es decir, sobre lo que le ha sido asignado a cada parte por el juez, y, además, una decisión comprensible posibilita en mejor medida el ejercicio de los controles, recursos y acciones que establece la ley, por parte de las autoridades respectivas y los interesados en la decisión.

“Valga anotar que la aclaración de la sentencia en los términos en que aparece regulada en la segunda parte del inciso primero del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, no vulnera el derecho de defensa, puesto que la aclaración se hace dentro del término de ejecutoria de la sentencia, esto es, durante el lapso concedido para la interposición de los recursos pertinentes. De esta manera, las partes podrán hacer uso de sus derechos en forma oportuna, eficaz y con pleno conocimiento del contenido del fallo”.

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

A su vez, al declarar exequible el artículo 311 del C. de P. C., de contenido casi idéntico al artículo 287 del C.G.P., en la Sentencia C-404 del 28 de agosto de 1997, la Corte Constitucional señaló lo siguiente:

“Cuarta. - La sentencia complementaria del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil.

“Realmente, como lo afirma el actor, el artículo 55 de la ley Estatutaria de la administración de justicia, establece que las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales.

“Precisamente el artículo 311, al permitir al juez adicionar la sentencia, dentro del término de ejecutoria, con otra complementaria, permite que se cumpla esta obligación de resolver sobre todos los hechos y asuntos debatidos en el proceso. Obsérvese que el artículo supone que el debate se cumplió siguiendo las reglas del debido proceso, y que el juez, al momento de fallar, incurrió en una omisión. Sería insensato, y contrario a la economía procesal, que la sentencia incompleta hubiera de ejecutarse así y que el juez que la dictó no pudiera completarla, de oficio o a petición de parte. ¿Por qué afirmar que la sentencia incompleta es inexistente?”

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 24 de junio de 1992, respecto del alcance preciso de la aclaración de las sentencias, señaló que:

“Al precisar la doctrina y la jurisprudencia los alcances del remedio de la aclaración de los fallos, ha insistido que los conceptos o frases que le abren paso a dicho correctivo, ‘no son los que surjan de las dudas que las partes aleguen acerca de la oportunidad, veracidad o legalidad de las afirmaciones del sentenciador; sino aquellos provenientes de redacción ininteligible o del alcance de un concepto o de una frase en concordancia con la parte resolutive del fallo’ (G.J. T. XLIX,47). No ha pretendido el legislador que en pos de aclarar la sentencia encuentre la parte la vía expedita para replantear el litigio, o en utilizar la aclaración para que se decida sobre la legalidad de lo ya resuelto en fallo, o en procurar que se analice y explique situaciones ya definidas.”

Por su parte, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en sentencia del 7 de septiembre 2001⁴ dijo lo siguiente:

“Ahora bien, la aclaración permitida es sobre aquellas frases que verdaderamente encierran motivo de duda, ante una deficiente redacción y que en especial estén contenidas en la parte resolutive. Más, so pretexto de una aclaración no se puede pretender, y le está vedado al juez alterar o modificar el contenido de la decisión, pues ello sería tanto como admitir que el propio juez puede revocar su sentencia. Tampoco es de recibo que la parte pretenda aclaración acerca de la valoración de las pruebas, o de las conclusiones, tomadas con relación a los hechos debatidos, o sobre la legalidad o ilegalidad de la decisión; es decir, no puede la providencia entrar a analizar lo que la ley establece.

“En reiteradas oportunidades la jurisprudencia ha sostenido que la aclaración que autoriza el artículo 309 Ibídem respecto de las sentencias o de los autos no puede ir más allá del contenido de lo resuelto, sobre lo

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de septiembre 2001. Rad. 25000-23-26-000-2000-0619-01 ACU-935.

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

cual no pueda volverse, so pretexto de una solicitud como la que ocupa ahora a la Sala, porque el sentido procesal de ella no es propiamente el de un recurso, sino el de despejar o disipar los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que están contenidos en la parte resolutive o influyan en ella, que no son las que abriga las partes en relación con la legalidad de las consideraciones del fallador, sino aquellas provenientes de redacción ininteligible, o del alcance de un concepto o de una frase en concordancia con la parte resolutive.

“De tal suerte, que son inadmisibles bajo estas formas procesales los argumentos de la parte demandada que pretendan un replanteamiento de los aspectos controvertidos y definidos en la providencia materia de aclaración.”

Acerca de las solicitudes de aclaración y corrección de las sentencias, en providencia del 4 de julio de 2002, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, señaló que no pueden merecer el tratamiento de recursos. Por el contrario, dijo, el estatuto procesal establece que los jueces no pueden revocar o reformar sus sentencias y no hace diferencia alguna en cuanto al tipo de proceso, vale decir que ellos sean de única o doble instancia, al tiempo que determina que el juez puede aclarar y corregir sus providencias, mediante un auto complementario, no mediante una nueva sentencia. Tampoco es posible, señaló, confundir la posibilidad de aclarar y corregir una providencia, con la de revocarla o reformarla. Efectivamente, agregó, aclarar, significa explicar “*conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda*”, siempre que estén presentes en la parte resolutive de la sentencia o que influyan en ella, pero jamás puede implicar cambios de fondo en la providencia. En el mismo sentido, (...)”.⁵

Igualmente, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en Sentencia del 28 de abril de 2005,⁶ al resolver sobre la solicitud de adición y aclaración presentada por la parte actora respecto de la Sentencia de 25 de noviembre de 2004, proferida con ocasión del recurso de anulación contra el Laudo Arbitral de 10 de junio de 2003, señaló lo siguiente:

“De acuerdo con el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil⁷, la aclaración de la sentencia es procedente, de oficio o a petición de parte, respecto de los ‘... *conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o que influyan en ella...*’ al paso que la adición del fallo, a términos del artículo 311⁸ del citado ordenamiento procesal procede cuando en la sentencia se omite ‘... *la resolución de cualquiera de los extremos de la Litis, o de cualquiera otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento...*’.

“1. Aclaración de sentencias

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera C.P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez. Sentencia el 4 de julio de 2002. Rad. 11001-03-26-000-2001-00049-01 (21217). Actor: Nación - Ministerio de Minas y Energía y otros.

⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Rad. 110010326000200300055-01, Exp. 25560, actor: Sociedad CENTRIMED LTDA, demandado: Hospital Militar Central.

⁷ Modificado Decreto 2282 de 1989, art. 1. 139

⁸ Modificado Decreto 2282 de 1989, art. 1.141

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

“Por ministerio de la ley, mediante la **aclaración** no es procedente reformar la sentencia pronunciada, pues dicha hipótesis está expresamente prohibida por el artículo 309 citado⁹, merced a que este texto legal establece una regla inequívoca: la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció (**principio de inmutabilidad de la sentencia por el mismo juez que la profirió**)¹⁰, pues con ella se agota el ejercicio de la jurisdicción del Estado en el caso litigado¹¹, regla que *‘marca de manera clara los alcances de la aclaración de la sentencia’*¹²; Por manera que resulta improcedente que mediante la aclaración se intente variar la sentencia en el fondo decidido, en tanto esta facultad excepcional difiere de la reforma o la revocación, pues aclarar significa *‘disipar o quitar lo que ofusca la claridad o la transparencia de lo resuelto.’*¹³

“Este remedio procesal alude, pues, exclusivamente a conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, se trata, entonces, como ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de una esencial aclaración, sustancial, o notable¹⁴ respecto del cuerpo del fallo, en caso que dichos conceptos o frases puedan dar lugar a interpretaciones encontradas y, así, sea el propio juzgador quien defina su sentido correcto.

“De modo que so pretexto de aclarar no es posible variar o alterar la decisión adoptada¹⁵, puesto que mediante la aclaración no es viable entrar a decidir nada nuevo, sino que tan sólo se busca poner fin a una duda propiciada por el equívoco empleo de uno o varios términos dentro del pronunciamiento judicial. O lo que es igual, no está permitido al sentenciador formular nuevos razonamientos, reconsiderar o exponer nuevos puntos de vista que entrañen una revisión total o parcial de las ideas que fueron emitidas en el fallo.¹⁶ El juez debe tener sumo cuidado de *‘no alterar ni modificar el sentido al explicar o aclarar el concepto oscuro debiendo hacerlo no cambiando la fuerza y el entendimiento de las sentencias, según decía la Ley de las Partidas; lo contrario no sería aclarar, sino variar o modificar, lo cual está vedado como se ha dicho.’*¹⁷

⁹ Para el profesor Morales Molina: “Como la ley no faculta al juez para reconsiderar las sentencias, revocándolas o reformándolas, la aclaración versa sobre las dudas que surjan de aquéllas, que no son las que las partes abriguen en relación a la legalidad misma de las consideraciones del sentenciador, porque si estas pudieran cambiarse o rectificarse, la ley no habría prohibido que el juez modificara el sentido de las sentencias que dicte” (Morales Molina, Hernando, Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General, Ediciones Lerner, Bogotá, Quinta Edición, 1965, p. 499).

¹⁰ Según el profesor Devis Echandía: “El juez sólo debe acceder a la aclaración cuando de acuerdo con su criterio le parezca que existe el motivo de duda sobre su decisión, aunque el peticionario piense otra cosa. La aclaración de la sentencia no puede llegar a modificar su alcance o el contenido de la decisión, pues debe limitarse a desvanecer las dudas que se produzcan por los conceptos o frases contenidos en ella, para precisar simplemente el sentido que se les quiso dar al redactarla.” (Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo I, Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, Decimotercera edición, 1994, p. 468).

¹¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, M.P. Pedro Lafont Pianetta, Auto de 22 de abril de 1996, Ref.: Expediente No. 4738.

¹² López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2002, p. 650: “En efecto, so pretexto de aclarar no es posible introducir modificación alguna a lo decidido y es por eso que debe el juez ser cuidadoso para no incurrir en violación de esta básica regla como sucedería, por ejemplo, si al aclarar señala que no dispuso la restitución de un bien sino lo contrario, o cuando aclara para señalar que la condena no es a partir de la ejecutoria de la sentencia sino seis meses más tarde que debe cumplirse, porque en estas hipótesis está excediendo el campo que le permite la aclaración y entra al de la modificación, que a él le está vedado”

¹³ Parra Quijano, Jairo. Derecho Procesal Civil, Tomo I Parte General, Editorial Temis, Bogotá, 1992, p. 241: “...como se ve no se trata de una autorización para que el juez pueda reformar o alterar la decisión que ha tomado. Aclarar significa dar transparencia a lo que está oscuro o confuso, pero en ningún caso reformar o agregar ni mucho menos cambiar la decisión”.

¹⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 31 de enero de 1940, M.P. Arturo Tapias Pilonieta, en G.J. T. XLIX, Nos. 1953 y 1954, P. 47.

¹⁵ Sobre corrección de sentencias Cfr. Carnelutti, Francisco. Instituciones del Nuevo Proceso Civil Italiano, Bosch, Casa editorial, Barcelona, 1942, p. 313 y ss.

¹⁶ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 31 de enero de 1940, M.P. Arturo Tapias Pilonieta, en G.J. T. XLIX, Nos. 1953 y 1954, P. 47.

¹⁷ G.J., Tomo XLVII, p. 306

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

“De allí que, para la procedencia de este fenómeno, por vía jurisprudencial, reiteradamente la Corte Suprema de Justicia ha fijado los siguientes presupuestos:

La inteligencia y aplicación de este precepto comportan: a) Que se trate de una sentencia y no de un auto sin fuerza de sentencia; b) que el motivo de duda de los conceptos o frases sea verdadero y no simplemente aparente; c) que dicho motivo de duda sea apreciado y calificado por el juez y no por la parte que pide la aclaración, desde luego que es aquél y no ésta quien debe explicar y fijar el sentido de lo expuesto y lo resuelto en el fallo; d) que la aclaración incida en las results de la sentencia y que no se trate de explicar puntos meramente académicos o especulativos, sin influjo en la decisión; e) que el solicitante de la aclaración señale de manera concreta los conceptos o frases que considera oscuros, ambiguos o dudosos; f) que con la aclaración no se pretenda ni se llegue a modificar, alterar o reformar lo decidido en la sentencia; g) que la aclaración no tenga por objeto renovar la controversia sobre la legalidad o juridicidad de las cuestiones resueltas en el fallo, ni buscar explicaciones sobre el modo de cumplirlo.”¹⁸

(...)

“2. Adición de sentencias

“Tal como ya se expresó, a voces del artículo 311 *eiusdem* la **solicitud de adición** procede cuando quiera que el juzgador omita la resolución de cualquiera de los extremos de la Litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, evento que bien puede asimilarse a lo que la doctrina extranjera denomina sentencia *citra petita* (*Ne eat index citra petita partium*)¹⁹.

“Nótese que este correctivo jurídico ha de adoptarse mediante sentencia complementaria, en orden a que sea allí donde se tome la determinación que dejó de resolver dentro de las solicitudes a su consideración al momento de proferir el fallo y, de esta suerte, se agregue o añada la providencia incompleta. Lo que da tanto como afirmar que la adición sólo tiene lugar cuando se presenta uno o varios puntos no decididos dentro del pronunciamiento judicial.

“Como quiera que en este evento también resulta predicable la regla arriba señalada (**principio de la inmutabilidad de la sentencia por parte del juez que la profirió**), no es procedente entrar a introducir

¹⁸ G. J. T. XCVIII, p. 5 y 6. En el mismo sentido ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil auto de 8 de noviembre de 1956, Nos. 2171 a 2173, p. 599; auto de 11 de octubre de 1960, Nos. 2228 y 2229, 582; auto de 14 de agosto de 1961, T. XCVI, p. 121; autos No. 034 de 8 de abril, No. 089 de 9 de agosto (CXCII, 47) y No. 138 de 22 de noviembre de 1988, sin publicar.

¹⁹ A juicio de Aragonese: “Existe la incongruencia por *citra petita* cuando la sentencia omite decidir sobre algunas de las pretensiones formuladas. El art. 359 de la LEC establece que la sentencia ha de decidir ‘todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate’. Se señala, pues, en dicho artículo el carácter exhaustivo que han de tener las resoluciones. El art. 6º del C.C. establece la obligación de los Tribunales de fallar; este criterio de atendibilidad general se desarrolla por el art. 359 en el sentido de que no tiene sólo que resolverse sobre lo principal, sino sobre todas las cuestiones y problemas que hayan sido planteados por las partes. El órgano jurisdiccional incumple su oficio, dando lugar al vicio de incongruencia cuando no resuelve todos los puntos litigiosos que han sido objeto de debate, lo que quiere decir, por una parte, que los puntos no discutidos pueden ser resueltos de una forma implícita con tal de que el fallo se acomode a las peticiones de los litigantes, pero que es una exigencia legal la de la resolución de todas las cuestiones que hayan sido debatidas.” (Aragoneses Alonso Pedro, Sentencias congruentes: pretensión, oposición, fallo, Madrid, Ed. Aguilar, 1957, p. 116). Sobre esta modalidad de incongruencia o defecto de la sentencia ver también Guasp, Derecho Procesal Civil, Madrid, 1962, p. 964 y ss. y Rocco, Hugo, Tratado de derecho procesal civil, Ed. Temis-Depalma, Bogotá, Buenos Aires, 1969.

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

modificaciones al proveído pretextando una supuesta adición²⁰: Tan solo se trata de *‘proveer adicionalmente, pero sin tocar lo ya resuelto’*²¹.

Con la Sentencia del 10 de junio de 2009,²² el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, señaló que:

“El artículo 311 del CPC prevé que la solicitud de adición procede cuando la sentencia judicial omita la resolución de cualquiera de los extremos de la Litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento y que es menester adoptar mediante una sentencia complementaria, para que a través de ésta se adopte la decisión que dejó de resolverse, y de esta manera se agregue o añada la providencia incompleta. Hay entonces incongruencia por *citra petita* (*Ne eat index citra petita partium*) cuando la sentencia omite decidir sobre algunas de las pretensiones formuladas y por ello la doctrina no duda en señalar que el órgano jurisdiccional incumple su oficio, dando lugar al vicio de incongruencia cuando no resuelve todos los puntos litigiosos que han sido objeto de debate. Por lo mismo la adición únicamente es procedente cuando se presentan uno o varios puntos no decididos dentro del pronunciamiento judicial y constituye un remedio procesal necesario para dar cumplimiento al mandato estatutario según el cual las sentencias judiciales deben referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales (Art. 55 Ley 270 de 1996 LEAJ). De otra parte, es preciso tener en cuenta que la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 311 del CPC antecitado. Correctivo jurídico que, por supuesto, resulta aplicable al laudo arbitral en virtud de lo dispuesto por el artículo 160 del Decreto 1818 de 1998, de acuerdo con el cual el fallo de los árbitros puede ser aclarado, corregido y complementado por el tribunal de arbitramento de oficio o a solicitud presentada por una de las partes dentro de los cinco días siguientes a la expedición del mismo, en los casos y con las condiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil. En este caso, justamente a instancias del hoy recurrente -quien presentó solicitud de aclaración, corrección y complementación del laudo arbitral- el tribunal de arbitramento procedió a complementar la providencia de 10 de marzo de 2008, mediante proveído de 27 de marzo siguiente respecto de la excepción de ‘falta de eficacia de las actuaciones de Telecom en el convenio después de su liquidación el 12 de junio de 2003’ y que no había sido resuelta en el laudo. Una conclusión se impone: el tribunal arbitral no había perdido competencia para resolver la excepción en el laudo complementario cuando al acoger la solicitud de adición presentada, por quien hoy interpone el recurso de anulación, decidió expedir un laudo complementario y, por tanto, no se configura la causal de anulación prevista en el numeral 8 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998.”

A su vez, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, con Sentencia del 31 de mayo de 2013,²³ señaló que:

“(…) las solicitudes de aclaración de sentencia no proceden para modificar lo resuelto por el juez, sino únicamente para dilucidar aspectos confusos del fallo, siempre que estén contenidos en su parte resolutive,

²⁰ “Si de lo que se trata es de adicionar, se entiende que bajo ningún aspecto se puede revocar la sentencia” Parra Quijano, Óp. Cit., p. 243.

²¹ López Blanco, Op. Cit. p. 655.

²² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 10 de junio de 2009. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. NR. 2003149. Exp. 11001-03-26-00-2008-00032-00. Actor Plescom Ltda. Demandado: Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom.

²³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. C.P.: Danilo Rojas Betancourth., sentencia del 31 de mayo de 2013. Rad. 47001-23-31-000-1996-04835-01 (17526). Actor: Sociedad Dangón Russo y Cía. Ltda.

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

en tanto que las de adición sirven para complementar la sentencia con aspectos contenidos en la demanda que no fueron objeto de decisión. Así lo ha señalado el Consejo de Estado:

No obstante que por mandato legal la sentencia no puede ser revocada ni reformada por el juez que la profirió, bien es cierto que el artículo 246 del C.C.A. y las normas pertinentes del C. de P. Civil, aplicables por la remisión del 267 del primero de esos estatutos, otorgan al fallador la facultad de aclararla, corregirla o adicionarla.

La aclaración en auto complementario, de los conceptos o frases que contenidos en la parte resolutive o que influyan en ella, ofrezcan verdaderos motivos de duda; la corrección, en auto complementario, de los errores puramente aritméticos; y la adición, mediante sentencia complementaria, de los extremos de la litis o de cualquier otro punto objeto de pronunciamiento, cuya resolución se hubiere omitido.

En ninguno de esos eventos puede el juzgador, so pretexto de ejercitar aquellas excepcionales facultades, variar o alterar la sustancia de la resolución original, debiendo limitarse a la aclaración, corrección o adición, de oficio o a solicitud de parte, en aras de la decisión expresa y clara de todos los aspectos que corresponda, exigida por los principios procesales²⁴.

(...)"

También, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, con la Sentencia del 6 de junio de 2013,²⁵ señaló que:

“Recuerda la Sala que en razón a la salvaguarda del principio de seguridad jurídica las sentencias son inmutables por el juez que las profirió (art. 309 del C.P.C.). Empero, el mismo ordenamiento jurídico prevé de manera excepcional, para casos expresamente determinados, la posibilidad de que el juez que profirió una sentencia la aclare, corrija o adicione (art. 309, 310, 311 del C.P.C.)”

Más recientemente, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, con Sentencia del 29 de octubre de 2015,²⁶ señaló que:

“(...) existen casos en los cuales la providencia no es clara en relación con decisiones asumidas que, eventualmente, serían materia de recurso por las partes, si éstas se vieran perjudicadas por el sentido de aquéllas. Por tal razón, el estatuto procesal civil consagra la posibilidad de que se soliciten aclaraciones, correcciones o complementaciones de los pronunciamientos del juez, mecanismos que se encuentran instituidos para que las partes tengan certeza sobre la forma en que las providencias las afectan, pues es precisamente con ello que se sabe si los intervinientes del proceso tienen interés para recurrir y, en ese orden, si se cumplen los requisitos para el ejercicio de los medios de control.

“Así, de acuerdo con el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil ‘... podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive

²⁴ “Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 22 de marzo de 1991, Exp. 0497, C.P. Amado Gutiérrez Velásquez. En similar sentido, véase el auto dictado por la Sección Tercera el 21 de mayo de 2008, Exp. 14.780, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.”

²⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 6 de junio de 2013. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Radicación número: 63001-23-31-000-2010-00101-01(19192) Actor: Yobany Alberto López Quintero. Demandado: Municipio de Calarcá.

²⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. C.P.: Danilo Rojas Betancourth, sentencia del 29 de octubre de 2015. Rad. 25000-23-26-000-2008-00411-02(40926)B. Actor: Cuellar Serrano Gómez S.A.

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

de la sentencia o que influyan en ella...’, lo que significa que las solicitudes de aclaración sólo son procedentes frente a aquellos aspectos que sean decisivos para las determinaciones finalmente asumidas por el juez, frente a las cuales podrán verse beneficiadas o perjudicadas las partes.

“Por tal razón, el ya citado artículo 331 del Código de Procedimiento Civil dispone que ‘... *en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva...*’, pues es indiscutible que el eventual interés que tenga la parte para recurrir el pronunciamiento objeto de aclaración o complementación, sólo surge cuando el juez fija su posición final frente a las decisiones asumidas.

(...)”

3. Los efectos *inter partes* de los Laudos arbitrales

La justicia arbitral al resolver las controversias sometidas a su consideración, que conciernen a aquellas contenciosas susceptibles de transacción y que se refieren a asuntos que afectan o pueden llegar a afectar derechos subjetivos de contenido patrimonial, lo hace mediante un Laudo arbitral que, como toda sentencia judicial, hace tránsito a cosa juzgada, pero con efectos *inter partes*. Lo anterior implica que sus decisiones y con ellas las motivaciones que guarden relación inescindible con tales decisiones, solo afectan positiva o negativamente a las Partes que hayan concurrido al proceso arbitral, por haber suscrito o extenderseles por ministerio de la ley el pacto arbitral. *A contrario sensu*, tales decisiones no producen efectos *erga omnes*, *inter comunis* o *inter pares*.

A partir de los anteriores preceptos normativos y del alcance que de los mismos ha hecho de manera uniforme la jurisprudencia de las altas Cortes, es claro que las sentencias como los Laudos arbitrales obligan, desde el momento en que se profieren, tanto al juez o tribunal que las emite, como a las Partes, sin que les sea dable a ninguno de ellos desconocerlas. El juez o el tribunal que las emite no las puede revocar. Además, le está vedado, so pretexto de aclarar, modificar, variar o alterar su decisión, servirse de la aclaración para decidir algo nuevo, y, en el evento de la complementación, alterar lo ya definido, sólo que, si alguna pretensión no fue decidida, la omisión se puede salvar con la correspondiente complementación que conlleve un pronunciamiento sobre un aspecto aún no resuelto.

Igualmente, destaca el Tribunal que, a través de las figuras analizadas no resulta pertinente buscar cambiar los parámetros interpretativos de una providencia. Es evidente que no es éste el escenario para plantear inconformidades con pareceres hermenéuticos que no se comparten, buscando con ello, indirectamente, obtener un cambio en el sentido de la decisión.

Todo lo anterior significa que por la vía de las solicitudes de aclaración no se puede pretender un cambio, reforma y mucho menos la revocatoria de la decisión judicial adoptada, ni tampoco que se aclaren conceptos o frases contenidos en la parte motiva de la providencia que no estén inescindiblemente vinculados o relacionados con la parte resolutive de la misma, de tal modo que esta última no se entienda sin aquellos.

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

Sólo se pueden aclarar los conceptos o las frases que el solicitante señale de manera concreta que ofrezcan verdadero motivo de duda, por ser oscuros, ambiguos o dudosos, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o que estando en la parte motiva influyan en ella. Ello exige que el motivo de duda de los conceptos o frases debe ser verdadero y no simplemente aparente, pues no se trata, por la vía de la aclaración, de abordar aspectos meramente especulativos, hipotéticos o, si se quiere, enteramente académicos, sin influjo alguno en la decisión.

Ahora, tales conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, no son los que surjan de las dudas que las Partes aleguen acerca de la oportunidad, veracidad o legalidad de las afirmaciones del sentenciador, sino aquellos provenientes de la redacción ininteligible o defectuosa, o del alcance de un concepto o de una frase en concordancia con la parte resolutive del fallo en caso que dicho concepto o frase pueda dar lugar a interpretaciones encontradas para permitir, en caso tal, que sea el propio juzgador quien defina su sentido correcto poniendo fin a la duda propiciada por el equívoco empleo de uno o varios términos dentro del pronunciamiento judicial, sin que le esté permitido formular nuevos razonamientos o reconsiderar o exponer nuevos puntos de vista que entrañen una revisión total o parcial de las ideas que fueron emitidas en el fallo.

Tampoco es admisible que la Parte pretenda aclaración acerca de la valoración de las pruebas, o de las conclusiones, tomadas con relación a los hechos debatidos o sobre la legalidad o ilegalidad de la decisión.

Igualmente, la solicitud de aclaración no puede ir más allá del contenido de lo resuelto, sobre lo cual no puede volverse, de manera tal que son inadmisibles los argumentos que pretendan un replanteamiento de los aspectos controvertidos y definidos en la providencia materia de aclaración, o lo que es lo mismo, que tengan por objeto renovar la controversia sobre la legalidad o juridicidad de las cuestiones resueltas en el fallo, ni buscar explicaciones sobre el modo de cumplirlo.

A su vez, sólo cuando el Laudo haya omitido resolver cualquiera de los extremos de la Litis o cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, cabe solicitar la adición o complementación o ser declarada por el tribunal, de oficio, por medio de laudo complementario.

4. Análisis de las solicitudes elevadas

Expuesto el marco teórico que rige las figuras de la aclaración y adición de las sentencias o de los Laudos arbitrales, procede el Tribunal a pronunciarse sobre las solicitudes antes mencionadas.

4.1. Sobre las solicitudes de aclaración y complementación en “relación con la calidad en la cual OCEAN actuó respecto del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ETANOL CARBURANTE EN INSTALACIONES DEL CONTRATISTA EN PUERTO DE BUENAVENTURA”

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

Confrontadas las solicitudes presentada por la apoderada de la sociedad **Bioenergy S.A.S.** frente a las normas legales arriba citadas relacionadas con la aclaración y complementación de los laudos arbitrales, en concordancia con el alcance que a las mismas ha atribuido la jurisprudencia de las altas Cortes, para este Tribunal arbitral es evidente que ninguno de los aspectos a los que esta petición alude merecen pronunciamiento alguno por la vía de una aclaración o complementación del Laudo.

En efecto, atrás se indicó que el artículo 285 del C.G.P., determina que la sentencia y en este caso el Laudo podrá ser aclarada “...cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o que influyan en ella”. A su turno, tal como se expuso al comienzo esta providencia, el artículo 287 del C.G.P. establece que “cuando la sentencia omite resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad”.

Luego de explicar los elementos probatorios y las consideraciones que el Tribunal tuvo en cuenta para adoptar la decisión, en la explicación o justificación acerca de tales requisitos, en la solicitud de aclaración y complementación se señala que

“Así las cosas, genera verdadero motivo de duda, el que, dentro de la parte considerativa y del resuelve del laudo arbitral, al referirse a la intención de las partes, se entienda que el querer de ellas era que, las dos sociedades esto es, **JUNAD Y OCEAN**, fueran las obligadas en la prestación del servicio de logística integral y que dicho aspecto fuera claro en las tratativas precontractuales y hasta la terminación del contrato, pero al mismo tiempo niegue la existencia del vínculo entre **BIOENERGY** y **OCEAN**, porque no fue la oferta de ésta la que se aceptó y porque **OCEAN** no suscribió la carta de intención ni el contrato.

“Téngase en cuenta que el contrato de logística objeto de este proceso, no es un contrato solemne que requiere de la formalidad escrita para su existencia (sic), sino que es un contrato consensual, por lo que, el simple hecho de que no se encuentre suscrito por **OCEAN**, no implica que no existiera el contrato frente a ésta, pues su voluntad de adherirse al mismo y de ser parte de éste, se demuestra plenamente con la manera de actuar de **OCEAN**, quien siempre se comportó como parte del contrato, al punto que demandó invocando el contrato celebrado.

“A su turno, no deja de ser confuso el que, teniendo las tratativas luego de la celebración del contrato, una función interpretativa, las conclusiones a las que llegó el Tribunal, en esta fase, no fueran tenidas en cuenta en la evaluación e interpretación del contrato y, contrario a eso, se concluyera que entre **BIOENERGY** y **OCEAN** no existía ningún vínculo legal, y que, producto de esta conclusión, se negara la pretensión segunda de la demanda y se absolviera a **OCEAN** de pagar en favor de **BIOENERGY** junto con **JUNAD**, los perjuicios ocasionados con su incumplimiento.”

Y con base en esa justificación, a continuación se solicita del Tribunal “**ACLARAR** y **COMPLEMENTAR** el laudo, en el sentido de indicar cuál es el fundamento jurídico para que, ateniéndose solamente al texto de la oferta aceptada, la carta de intención suscrita y el contrato firmado con **JUNAD**, no tenga en cuenta las demás pruebas que obran dentro del proceso, especialmente la confesión de **OCEAN** de que si era parte del contrato de logística, para denegar las pretensiones

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

solicitadas en la demanda de **BIOENERGY** en relación con **OCEAN**”, lo mismo que “**ACLARAR y COMPLEMENTAR** el laudo, en el sentido de indicar cuál fue la aplicación dada por el Tribunal a lo previsto en el artículo 1618 del Código Civil, en relación con preferir la intención de las partes a la literalidad del contrato, a la hora de interpretarlo y cuál el fundamento legal para no tener en cuenta la intención de las partes y la manera en que se ejecutó el contrato para denegar la pretensión segunda principal y siguientes principales de la demanda.”

Examinada tal justificación y la petición de **Bioenergy S.A.S.** se advierte que en realidad ellas no se sustentan en la falta de inteligibilidad o en aspectos dudosos que puedan ofrecer algunas frases sobre las cuales se edificó la decisión adoptada ni en haberse omitido resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento.

En otros términos, en ninguna parte se hace referencia a la necesidad de explicar fragmentos del texto que aparezcan oscuros por virtud de una redacción ininteligible que se pueda endilgar al Laudo proferido por este Tribunal el 1 de julio de 2020, por una parte, y, por la otra, a la necesidad de resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento y no se hizo, pues examinada la demanda arbitral y su reforma, la contestación de la demanda de reconvencción y los alegatos de conclusión, el Tribunal no encuentra ninguna petición relacionada con el tema que ahora plantea su apoderada por la vía de la complementación del Laudo, que haya dejado resolver o qué punto, que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, fue omitido en el Laudo.

Tales “justificación” y “petición” como se observa del escrito que las contiene, son en realidad una sustentación de una inconformidad con las razones tanto de la motivación como de la decisión de no haber accedido el Tribunal a una pretensión principal, aunque, precisamente por esas mismas razones ampliamente explicadas en el laudo fue por lo que el Tribunal, al negar la pretensión principal, accedió a la respectiva pretensión subsidiaria, con lo cual se atendió en su motivación y decisión fundadas su demanda arbitral.

En el fondo, así mismo, se plantea una impugnación respecto de una decisión y su motivación con el propósito de que por la vía de la aclaración y la ulterior complementación se deje sin piso la argumentación que le permitió al Tribunal en el Laudo resolver a favor de la solicitante la pretensión subsidiaria y, en su lugar, se acceda ahora a la pretensión principal, lo que de suyo comportaría, de contera, una modificación de la decisión, lo cual está prohibido por la ley.

Así las cosas, es improcedente tanto la solicitud de aclaración como de complementación solicitadas.

4.2. Sobre las solicitudes de aclaración y complementación respecto de los costos en que incurrió BIOENERGY para transportar y poder descargar el etanol en el Puerto de Barranquilla

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

Confrontadas las solicitudes presentada por la apoderada de la sociedad **Bioenergy S.A.S.** frente a las normas legales arriba citadas relacionadas con la aclaración y complementación de los laudos arbitrales, en concordancia con el alcance que a las mismas ha atribuido la jurisprudencia de las altas Cortes, para este Tribunal arbitral es evidente que ninguno de los aspectos a los que esta petición alude merecen pronunciamiento alguno por la vía de una aclaración o complementación del Laudo.

En efecto, atrás se indicó que el artículo 285 del C.G.P., determina que la sentencia y en este caso el Laudo podrá ser aclarada “...cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o que influyan en ella”. A su turno, tal como se expuso al comienzo esta providencia, el artículo 287 del C.G.P. establece que “cuando la sentencia omite resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad”.

Luego de explicar los elementos probatorios y las consideraciones que el Tribunal tuvo en cuenta para adoptar la decisión, en la explicación o justificación acerca de tales requisitos, en la solicitud de aclaración y complementación se señala que

“Así las cosas, la decisión del Tribunal de negar el reconocimiento solicitado, es confusa y contradictoria con las consideraciones del Laudo, pues no se encuentra conforme con los hechos y reconocimientos que el Tribunal hace en las consideraciones y aún en la parte resolutive (sic) del laudo, tal y como se acaba de hacer referencia.

“Y resulta confusa la afirmación del Tribunal de que, este valor no se reconoce porque ‘con éstos embarques, **BIOENERGY** no tuvo que incurrir en gasto alguno por concepto de transporte de etanol del Puerto de Buenaventura al Puerto de Barranquilla’ si en efecto, el cambio de puerto redundó en un mayor valor que tuvo que ser pagado por **BIOENERGY**, tal como se acreditó con las facturas aportadas al proceso y que no fueron tachadas, por lo que son plena prueba.”

Y con base en esa justificación, a continuación se solicita del Tribunal, **ACLARAR Y COMPLEMENTAR** el laudo en el sentido de señalar cuál fue el fundamento jurídico para no declarar a **JUNAD** responsable de los perjuicios que su incumplimiento le causó a **BIOENERGY**, específicamente en relación con el mayor valor de los gastos en que incurrió para el transporte del etanol al Puerto de Barranquilla, para el segundo y tercer embarque pactados.”

Examinada tal justificación y la petición de **Bioenergy S.A.S.** se advierte, como en el caso anterior, que en realidad ellas no se sustentan en la falta de inteligibilidad o en aspectos dudosos que puedan ofrecer algunas frases sobre las cuales se edificó la decisión adoptada ni en haberse omitido resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento.

En otros términos, en ninguna parte se hace referencia a la necesidad de explicar fragmentos del texto que aparezcan oscuros por virtud de una redacción ininteligible que se pueda endilgar al Laudo proferido por este Tribunal el 1 de julio de 2020, por una parte, y, por la otra, a la necesidad de resolver sobre

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento y no se hizo, pues examinada la demanda arbitral y su reforma, la contestación de la demanda de reconvencción y los alegatos de conclusión, el Tribunal no encuentra ninguna petición relacionada con el tema que ahora plantea su apoderada por la vía de la complementación del Laudo, que haya dejado resolver o qué punto, que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, fue omitido en el Laudo.

Tales “justificación” y “petición” como se observa del escrito que las contiene, son en realidad una sustentación de una inconformidad con las razones tanto de la motivación como de la decisión de no haber accedido el Tribunal a una parte de la pretensión principal.

Así las cosas, es improcedente tanto la solicitud de aclaración como de complementación solicitadas.

4.3. Sobre las solicitudes de aclaración y complementación respecto de la negativa de condenar en costas a la parte vencida

Confrontadas las solicitudes presentada por la apoderada de la sociedad **Bioenergy S.A.S.** frente a las normas legales arriba citadas relacionadas con la aclaración y complementación de los laudos arbitrales, en concordancia con el alcance que a las mismas ha atribuido la jurisprudencia de las altas Cortes, para este Tribunal arbitral es evidente que ninguno de los aspectos a los que esta petición alude merecen pronunciamiento alguno por la vía de una aclaración o complementación del Laudo.

En efecto, atrás se indicó que el artículo 285 del C.G.P., determina que la sentencia y en este caso el Laudo podrá ser aclarada “...*cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o que influyan en ella*”. A su turno, tal como se expuso al comienzo esta providencia, el artículo 287 del C.G.P. establece que “*cuando la sentencia omite resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad*”.

Luego de explicar los elementos probatorios y las consideraciones que el Tribunal tuvo en cuenta para adoptar la decisión, se solicita **ACLARAR Y COMPLEMENTAR** el laudo en el sentido de indicar cuál es el fundamento legal para negar la condena en costas contra la parte condenada, si conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la buena o mala fe no es un factor que pueda ser considerado para fijar o eximir del pago de las costas, y además, por cuanto el numeral 5° del artículo 365 del Código General del Proceso excluye esos factores subjetivos para la imposición de la condena.”

Examinada tal justificación y la petición de **Bioenergy S.A.S.** se advierte, como en el caso anterior, que en realidad ellas no se sustentan en la falta de inteligibilidad o en aspectos dudosos que puedan ofrecer algunas frases sobre las cuales se edificó la decisión adoptada ni en haberse omitido resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento.

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

En otros términos, en ninguna parte se hace referencia a la necesidad de explicar fragmentos del texto que aparezcan oscuros por virtud de una redacción ininteligible que se pueda endilgar al Laudo proferido por este Tribunal el 1 de julio de 2020, por una parte, y, por la otra, a la necesidad de resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento y no se hizo, pues examinada la demanda arbitral y su reforma, la contestación de la demanda de reconvención y los alegatos de conclusión, el Tribunal no encuentra ninguna petición relacionada con el tema que ahora plantea su apoderada por la vía de la complementación del Laudo, que haya dejado resolver o qué punto, que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, fue omitido en el Laudo.

Tales “justificación” y “petición” como se observa del escrito que las contiene, son en realidad una sustentación de una inconformidad con las razones tanto de la motivación como de la decisión de no haber accedido el Tribunal a la pretensión principal.

Así las cosas, es improcedente tanto la solicitud de aclaración como de complementación solicitadas.

4.4. Sobre las solicitudes de aclaración y complementación respecto del plazo para que INVERSIONES JUNAD S.A.S. realice el pago de las condenas impuestas y respecto de la pretensión de que se condene al pago de intereses de mora

Confrontada las solicitudes presentadas por la apoderada de la sociedad **Bioenergy S.A.S.** frente a las normas legales arriba citadas relacionadas con la aclaración y/o complementación de los laudos arbitrales, en concordancia con el alcance que a las mismas ha atribuido la jurisprudencia de las altas Cortes, junto con las decisiones observadas contenidas en el Laudo Arbitral, para el Tribunal es evidente que ella sí merece pronunciamiento por la vía de la complementación del Laudo y no por la vía de la aclaración.

En efecto, atrás se indicó que el artículo 285 del C.G.P., determina que la sentencia y en este caso el Laudo podrá ser aclarada “...cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o que influyan en ella”. A su turno, tal como se expuso al comienzo esta providencia, el artículo 287 del C.G.P. establece que “cuando la sentencia omite resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad”.

Luego de explicar los elementos probatorios y las consideraciones que el Tribunal tuvo en cuenta para adoptar la decisión, en la explicación o justificación acerca de tales requisitos, en las solicitudes de aclaración y complementación se señala que

“De lo expuesto en la parte resolutive del Laudo Arbitral, se tiene que, existe una condena en contra de la sociedad **INVERSIONES JUNAD S.A.S.** y a favor de **BIOENERGY S.A.S.**, no obstante lo cual, el

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

Tribunal Arbitral omitió señalar un plazo dentro del cual la sociedad demandada debe proceder con el pago de las condenas impuestas, a pesar de haber sido expresamente solicitado en las pretensiones de la demanda.

“Al respecto, es importante mencionar que, el laudo arbitral constituye un título ejecutivo que puede ejecutarse mediante un proceso ejecutivo, siempre y cuando contenga una obligación expresa, clara y **EXIGIBLE**.

“Al efecto, en los términos en que se profirió el Laudo Arbitral, se tiene una obligación [entiéndase las condenas impuestas] clara y expresa, mas no exigible, puesto que el Tribunal no estableció el plazo dentro del cual la sociedad **INVERSIONES JUNAD S.A.S.** debía proceder con el pago de las condenas impuestas en su contra.

“Ahora bien, como no se señaló el término dentro del cual la demandada debía proceder con el pago de las condenas impuestas, y sobre todo, no se accedió al reconocimiento de intereses moratorios en contra de **INVERSIONES JUNAD S.A.S.**, se dejó abierta la puerta para que la parte vencida, a su arbitrio y sin que pueda ser exigible por mi mandante, proceda a cancelar el valor de las condenas impuestas, en la fecha en que a bien tenga, sin que, se repite, haya lugar al cobro y reconocimiento de intereses moratorios a favor de mi poderdante.

“En la parte resolutive del Laudo Arbitral se declaró el incumplimiento del Contrato por parte de la sociedad convocada. Como consecuencia en dicho incumplimiento se accedió a las pretensiones de condena a partir de la ejecutoria del laudo arbitral. Sin embargo, no se estableció un plazo para cumplir con el pago de dicha condena ni la obligación de reconocer intereses moratorios sobre la suma debida, a partir del vencimiento del plazo que se otorgue para pagar.”

Igualmente, se señaló que

“Téngase en cuenta que la condena a intereses de mora se solicitó sí es que dentro del plazo que el Tribunal conceda para pagar las condenas, el deudor no las paga.

“No obstante lo anterior, dicha solicitud fue denegada por el Tribunal, [en nuestro concepto de manera errada], aduciendo que no había lugar al reconocimiento de intereses, puesto que, 1) las condenas en moneda extranjera, debían ser canceladas en su equivalente en moneda legal colombiana teniendo en cuenta la tasa representativa del mercado cambiario a la fecha en que se realice el pago, y 2) respecto de las condenas en moneda legal colombiana debían ser actualizadas al IPC a la fecha en que se realice el pago.

“Al respecto, se debe precisar que, una cosa es la forma en cómo se deben cancelar las condenas impuestas, esto es, dependiendo si es una condena en moneda extranjera [en su equivalente en moneda legal colombiana a la tasa representativa del mercado en la fecha del pago] o en moneda legal colombiana [actualizada al IPC a la fecha del pago], y otra muy distinta es, la causación y reconocimiento de intereses moratorios sobre el valor de las condenas impuestas, **si éstas no son canceladas dentro de un plazo que deberá fijar el Tribunal Arbitral para proceder con dicho pago.**”

Y con base en esa justificación, a continuación se solicita del Tribunal, **ACLARAR Y COMPLEMENTAR** la providencia en el sentido de señalar expresamente el plazo dentro del cual la

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

parte condenada debe efectuar las sumas ordenadas en el laudo y **ADICIONAR Y COMPLEMENTAR** su providencia, en el sentido de indicar que las sumas a que fue condenada la parte demandada, deberá ser pagada dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del laudo, advirtiendo que si no se paga, a partir del día siguiente al vencimiento del plazo mencionado se causan intereses moratorios liquidados conforme a lo solicitado respecto de las condenas realizadas.

Examinadas tales justificaciones y petición de **Bioenergy S.A.S.** se advierte en estos casos que en realidad ellas están debidamente sustentadas en haberse omitido analizar y resolver sobre uno de los extremos de la litis que debía ser objeto de pronunciamiento, por lo que se accederá a tal solicitud y se dispondrá, conforme a lo pedido en la primera parte de la pretensión sexta principal que no fue examinada y resuelta, que las sumas de dinero a que se refiere la Pretensión Subsidiaria de la Quinta Principal se deberán pagar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del Laudo.

Complementariamente, examinadas tales justificaciones y petición de **Bioenergy S.A.S.** se advierte igualmente en este caso que en realidad ellas están debidamente sustentadas en haberse omitido analizar y resolver sobre uno de los extremos de la litis que debía ser objeto de pronunciamiento, porque tal y como lo advierte la apoderada de la convocante conforme a la ley, una cosa es la forma en cómo se deben cancelar las condenas impuestas, esto es, dependiendo si es una condena en moneda extranjera o en moneda legal colombiana, que fue lo que se analizó en el Laudo y otra muy distinta es, la causación y reconocimiento de intereses moratorios sobre el valor de las condenas impuestas, **si éstas no son canceladas dentro de un plazo que deberá fijar el Tribunal Arbitral para proceder con dicho pago.**

En tal virtud, se accederá también a tal solicitud y se dispondrá, conforme a lo pedido en la segunda parte de la Pretensión Sexta Principal que no fue examinada y resuelta, disponer que si las sumas de dinero a que se refiere la Pretensión Subsidiaria de la Quinta Principal no se pagan dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del Laudo, se deberá pagar intereses de mora sobre los saldos a pagar, liquidados así:

- a) Respecto de las sumas denominados en dólares de los estados unidos de américa a la tasa máxima para obligaciones en moneda extranjera o a la tasa máxima para los intereses de mora certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia o la entidad que haga sus veces si se ordena su conversión a moneda legal colombiana.
- b) Respecto de las sumas denominados moneda legal colombiana a la tasa máxima para los intereses de mora certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia o la entidad que haga sus veces.

Para tal efecto, se dictará Laudo complementario.

4.5. Corrección de oficio de la decisión Octava de la Resolutiva del Laudo

Por las razones expuestas en los numerales 4.4 y 4.5 anteriores, de oficio el Tribunal corregirá la decisión Octava para excluir de ella la pretensión sexta principal.

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

Por todas las consideraciones anteriores el Tribunal

RESUELVE:

Primero: Agregar al expediente el documento relacionado por Secretaría.

Segundo: Negar, por improcedentes, las solicitudes de aclaración y complementación presentadas por la apoderada de la Sociedad **Bioenergy S.A.S.:**

“a) En relación con la calidad en la cual **OCEAN** actuó respecto del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ETANOL CARBURANTE EN INSTALACIONES DEL CONTRATISTA EN PUERTO DE BUENAVENTURA.”

“b) Respecto de los costos en que incurrió **BIOENERGY** para transportar y poder descargar el etanol en el Puerto de Barranquilla”; y,

“e) Respecto de la negativa de condenar en costas a la parte vencida.”

Tercero: Adiciónase el Laudo proferido el 1 de julio de 2002 así:

LAUDO COMPLEMENTARIO

“**SEXTA:** Disponer que las anteriores sumas de dinero se deberán pagar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del Laudo, y, en caso de que no se realice el pago en el plazo establecido, deberá pagar intereses de mora sobre los saldos a pagar, liquidados así:

“a) Respecto de las sumas denominados en dólares de los estados unidos de américa a la tasa máxima para obligaciones en moneda extranjera o a la tasa máxima para los intereses de mora certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia o la entidad que haga sus veces si se ordena su conversión a moneda legal colombiana.

“b) Respecto de las sumas denominados moneda legal colombiana a la tasa máxima para los intereses de mora certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia o la entidad que haga sus veces.”

Habiendo prosperado la pretensión Subsidiaria de la Quinta Principal, conforme a lo pedido en la pretensión sexta principal de la demanda arbitral que no fue examinada y resuelta en los términos solicitados, el Tribunal dispondrá que las sumas de dinero a que se refiere el numeral Séptimo de la parte resolutive del Laudo proferido el 1 de julio de 2020, se deberán pagar dentro de los cinco (5) días

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

siguientes a la ejecutoria del citado Laudo, y, en caso de que no se realice el pago en dicho plazo, deberá pagar intereses de mora sobre los saldos a pagar, liquidados así:

a) Respecto de las sumas denominados en dólares de los Estados Unidos de América a la tasa máxima para obligaciones en moneda extranjera o a la tasa máxima para los intereses de mora certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia o la entidad que haga sus veces si se ordena su conversión a moneda legal colombiana.

b) Respecto de las sumas denominados moneda legal colombiana a la tasa máxima para los intereses de mora certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia o la entidad que haga sus veces.

Cuarto: Por las razones expuestas en el numeral 4.4 de la parte motiva y las decisiones contenidas en el numeral anterior, de oficio, corrígese el numeral Octavo de la parte resolutive del Laudo proferido el 1 de julio de 2020, el cual quedará así:

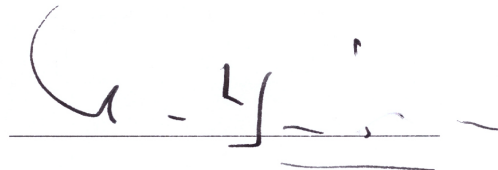
“**Octavo:** Negar las pretensiones segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima principales de la demanda arbitral, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo.”

Quinto: Convocar a las Partes a audiencia que se celebrará el cinco (5) de agosto de 2020 a las 3:00 con el fin de resolver, si se solicitan, las solicitudes de aclaración y/o adición del Laudo Complementario contenido en el numeral Tercero de esta providencia.

Notifíquese.

La anterior decisión se notificó en estrados.

Agotado el objeto de la presente audiencia se levantó la sesión.



Firma

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Árbitro Único

Tribunal Arbitral de Bioenergy S.A.S. Vs. Inversiones Junad S.A.S. y Ocean Energy S.A.S. (15788)

(Asiste por medios electrónicos)

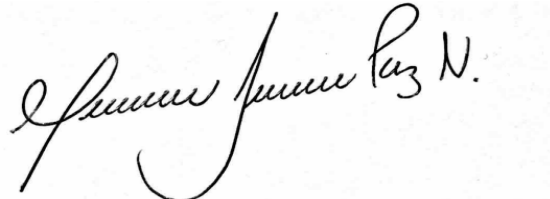
SONIA ELIZABETH ROJAS IZÁQUITA
Apoderada Bioenergy S.A.S.

(Asiste por medios electrónicos)

HENRY ALBERTO BECERRA LE
Apoderado Junad S.A.S.

(Asiste por medios electrónicos)

GERMÁN A. GARZÓN MONZÓN
Apoderado Ocean Energy S.A.S.



MARÍA ISABEL PAZ NATES
Secretaria